



EL PAPEL DEL SECTOR EMPRESARIAL RUMBO A LA TRANSICIÓN EN MÉXICO 1970-2000

Marisela Jiménez Parra (96311763)

Licenciatura en sociología. Área de concentración: Política.

Asesora: Dra. Miriam Alfie Cohen.

Sinodales: Dr. Luis H. Méndez Berrueta. Dra. Esperanza Isabel Palma Cabrera.

Diciembre de 2007

ÍNDICE

Introducción.....	3
CAPÍTULO I	
CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS DEL ESTADO Y EN EL DISCURSO DEL SECTOR EMPRESARIAL RUMBO A LA TRANSICIÓN EN MÉXICO 1970-1982	
Orígenes del sector empresarial.....	4
Conflictos Estado–empresarios en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez:.....	6
Ruptura en las relaciones entre el sector empresarial y gobierno en los inicios de la crisis en el sexenio de José López Portillo.....	16
CAPÍTULO II	
EMPRESARIOS Y GOBIERNO FRENTE AL NUEVO ORDEN ESTATAL Y LA TRANSICIÓN EN MÉXICO	
Contexto previo a la transición en México.....	26
Inicios de la transición en México: Miguel de la Madrid Hurtado.....	30
El auge del proyecto neoliberal: Carlos Salinas de Gortari.....	38
El inicio del fin del proyecto liberal social en el nuevo orden estatal: Ernesto Zedillo Ponce de León.....	46
CONCLUSIÓN.....	51
ABREVIATURAS.....	56
BIBLIOGRAFÍA.....	57

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene el propósito de estudiar la relación Estado-empresarios rumbo a la transición mexicana en cinco periodos diferentes: Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León.

No fue al azar el haber optado por estos cinco periodos para analizar la relación Estado-empresarios, esto no quiere decir que en otras administraciones no haya habido conflictos. Simplemente, es el movimiento estudiantil de 1968 el parteaguas que induce al país a cambios estructurales tanto en el aspecto económico, político y social. Y que lleva aun sólo fin la transición mexicana.

La primera etapa que se analiza es entre 1970 y 1982, donde comienzan a darse manifestaciones contra el programa reformista, y por la unificación del sector privado. Este momento también se caracteriza por la formación del Consejo Coordinador empresarial (CCE) y por la oposición del sector empresarial en contra del régimen establecido.

Se manifiesta un cambio en las relaciones entre el sector empresarial y gobierno, por la nacionalización de la banca se reactiva el descontento empresarial buscando nuevas salidas a su participación, en lo económico y político, y la necesidad de la intervención del empresariado mexicano en el desarrollo económico del país.

La segunda etapa es entre 1982 y 2000, donde los brotes liberalizadores de los dos sexenios anteriores empiezan hacer efecto. La llegada de un nuevo grupo de tecnócratas al poder; el desmantelamiento del Estado es inminente con el nuevo proyecto neoliberal; la profundización del modelo neoliberal y el liberalismo social como salvamento a todos los problemas económicos, políticos y sociales, y la intervención del sector empresarial en el ámbito económico como rector del desarrollo económico del país, y el significativo ingreso del sector privado al área política.

El comienzo del fin del modelo neoliberal; la promesas, las propuestas y los compromisos incumplidos, por un proyecto que se caracterizó por su incapacidad de llevar a cabo los aspectos fundamentales en la vida económica, política y social del país.

CAPÍTULO I

CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS DEL ESTADO Y EN EL DISCURSO DEL SECTOR EMPRESARIAL RUMBO A LA TRANSICIÓN EN MÉXICO

ORÍGENES DEL SECTOR EMPRESARIAL

“Para analizar los orígenes del sector empresarial en México se tiene que tomar en cuenta tres aspectos muy importantes como son el lugar de nacimiento, origen socioeconómico de los padres y ubicación, tipo y nivel de educación (Ai Camp, 1990:72).

En lo referente al lugar de nacimiento existen estudios que comprueban que los empresarios son de origen urbano y que la mayoría han vivido en la ciudad de México y que tienen mayor oportunidad de acceder a la escuela y terminar sus estudios superiores y ser líderes, lo contrario a los mexicanos de origen rural. Otro factor muy importante y que va ligado a los anteriores es el aspecto social, es decir, la mayor parte de la población empresarial viene de la clase media y alta, siendo esta última de mayor porcentaje¹.

Los empresarios de la actualidad alcanzaron sus posiciones en la misma forma que sus abuelos, no son hombres que hayan labrado su propia fortuna sino que contaron con la ayuda familiar para ascender a la cima².

Señala Ai Camp que los antecedentes son muy importantes, lo mismo que el país de origen de los padres para poder acceder exitosamente al mundo del sector privado, sin embargo no es menos importante el lugar de nacimiento y el nivel educativo. Otro factor importante es el hecho de que los empresarios hayan asistido a escuelas privadas en un porcentaje más alto que el sector político, y como consecuencia, distinta ideología y por ende afecta su relación con la toma de decisiones.

A diferencia de Estados Unidos y otros países de Europa, en México el empresariado se formó gracias al Estado que tuvo un papel importante en la organización de este sector. Pues gracias al corporativismo que predominó acentuadamente desde Lázaro Cárdenas y fortaleciendo al Estado sobre cualquier grupo social, el sector empresarial fue una comunidad que poco a poco se fue volviendo más autónoma y más fuerte, así se estableció la COPARMEX como una influencia en la toma de decisiones del sector privado. “Los empresarios, organizaciones de la sociedad civil altamente

¹ La Revolución Mexicana no cambió en nada la situación del sector empresarial ya que ningún empresario mexicano es de origen rural y humilde.

² A diferencia de Estados Unidos, el empresariado mexicano ha cerrado las oportunidades a la mayoría de los grupos. En Estados Unidos cada vez se abre este círculo a la clase trabajadora.

comprometidas con las políticas neoliberales, entienden el proceso de transición como el terreno de actuación de los propietarios y gerentes de empresa operando en mercados libres según criterios de rentabilidad, propugnan y justifican esta libertad de la propiedad con un discurso centrado en el crecimiento y la eficacia y se plantean una democracia mínima de tipo representativo y mediatizada por competencia entre partidos y alternancia de poder” (Alfie, 1998:90).

CONFLICTOS ESTADO- EMPRESARIOS EN EL SEXENIO DE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (1970-1976)

Las funciones del Estado³ y su relación con otros actores políticos. Es complicado ya que algunos teóricos recientes han indicado cinco posibles relaciones: "La primera es que el Estado sólo provee una arena abierta para que varios grupos, incluidos el sector empresarial, luchan por la supremacía en la elección del bien común, la segunda señala al Estado como un arbitro activo ante quien apelan los actores sociales para arreglar sus conflictos, la tercera relación afirma que el Estado favorece a las élites y en particular al sector privado en sus conflicto con las masas, la cuarta explica que el Estado favorece a los intereses de de las masas y la quinta y última afirma que el Estado, autónomo en sus relaciones con cualquiera de los grupos, está comprometido a manipular todos los grupos sociales, en particular a las masas y al sector privado" (Ai Camp, 1990:19).

La reflexión que aquí se propone son las relaciones entre el Estado y el sector empresarial, cuál ha sido el papel que ha desempeñado el sector privado en la arena pública, es decir, su relación con el Estado y a sí dar paso a la transición hacia la democracia⁴ en México. En este sexenio, la acción empresarial estuvo motivada por las políticas que puso en marcha el gobierno⁵, las cuales fueron consideradas como un atentado contra los intereses empresariales y perjudiciales para el modelo capitalista. A pesar de todo existió un acuerdo entre el gobierno y los empresarios⁶ respecto a la influencia de esta comunidad en el gobierno. Sin embargo a principios del mandato de Luis Echeverría las relaciones empezaron a modificarse a causa del discurso populista del gobierno. Todo ello creó preocupación y desconfianza en el empresariado mexicano y generó una fuerte reacción empresarial.

³ Para Weber el Estado es la máxima expresión de la comunidad política. El estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la coacción física legítima.

⁴ El concepto de democracia es un concepto antiguo, y que en la actualidad existe confusión con el término además de que es empleado indiscriminadamente para hacer referencia a todo tipo de cuestiones. Bobbio la define como una forma de gobierno en la cual el poder no está en manos de uno o de unos cuantos sino de todos, o mejor dicho de la mayor parte, y como tal se contrapone a las formas autocráticas como la monarquía y la oligarquía.

⁵ Por gobierno se entiende el conjunto de los órganos a los que institucionalmente les está confiando el ejercicio del poder, que dirigen la comunidad política, es el timonel, el que guía la nave. El gobernante tiene la obligación de cumplir con el papel encomendado, sortear las tormentas y los escollos para llevar a buen puerto a los pasajeros.

⁶ Se entiende no meramente como el fundador de su compañía, sino que también es la fuente de decisiones y de crecimiento. Es el engranaje principal sobre el cual descansa la empresa para la supervivencia.

“El conflicto entre el gobierno y los empresarios en el primer quinquenio de los años setenta adopta la forma de una crisis de racionalidad administrativa, que se caracteriza por los siguientes elementos: la ruptura de la consistencia de la unidad burocrática, esto es, el desfase crítico entre intereses privados y decisiones gubernamentales; la ruptura de la cohesión burocrática o de la unidad del ejecutivo y la burocracia da la inserción directa de los intereses privados en el aparato estatal; y la incoherencia crítica del aparato administrativo, el cual experimenta un grado perverso de politización. Esta crisis afecta tanto la capacidad reguladora del Estado como las formas de representación empresarial.

Como se sabe estas relaciones han sido siempre tensas y conflictivas, a pesar de que según Echeverría se preocupó por el modelo económico y por el papel del sector empresarial como actor principal del éxito de este modelo. Sin embargo “a nadie escapó que el gobierno apoyaba y alentaba las pretensiones obreras, pues encajaban perfectamente en la estrategia del desarrollo compartido”⁷ (Medina, 1995:228).

La política del desarrollo compartido expuesta por el presidente como una nueva opción al desarrollo estabilizador⁸, hizo aparecer la intervención estatal no como política complementaria de la intervención privada sino como antagónica a ésta. De hecho este conflicto se originó a partir de la nueva política económica de la administración de Luis Echeverría Álvarez, que comenzó a procurar la reafirmación del papel del Estado como rector de la economía mediante la ampliación de la producción estatal y la asignación de los recursos.

“Los grupos empresariales desde antes de la transición⁹ habían roto su histórica alianza con el Estado mexicano; al empresariado le pesó desde inicios de los años setenta la terquedad gubernamental de mantener un modelo económico divorciado de la

⁷ Los principios básicos de la política del desarrollo compartido fueron la negación del crecimiento como principal objetivo del desarrollo económico del país y el fortalecimiento del sector público para convertirlo en el agente impulsor del desarrollo. Desde esta perspectiva, se puso énfasis en problemas como el desempleo, la distribución del ingreso y la dependencia externa. La pretensión era que mediante un gasto público enorme y creciente se alcanzara una mayor justicia social.

⁸ El desarrollo estabilizador 1954-1970 se puso en marcha durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). Para reducir el alza de los precios y de salarios, el gobierno comenzó a gastar menos y a frenar el aumento de sueldos a los trabajadores. Con esto los costos se estabilizaron, las finanzas del gobierno mejoraron y la economía comenzó a crecer con muy poca inflación, es decir, sin que se hiciera circular más dinero y los precios estuvieran aumentando continuamente. Por casi 20 años el gobierno de México sostuvo con buenos resultados este plan económico que se llamó desarrollo estabilizador.

⁹ La transición política hace referencia al intervalo que se extiende entre un régimen político y otro, siendo su principal característica el hecho que durante la misma, las reglas del juego no están plenamente definidas, incluso se hallan en flujo permanente y por lo general, son objeto de una ardua contienda a efectos de establecer los espacios y procedimientos cuya configuración determinará los recursos que legítimamente pueden aplicarse en la arena política y los actores a los que se permitirá participar en ella.

realidad productiva, no soportó que ante los trascendentes cambios que se apreciaban en el mercado mundial, el gobierno no sólo siguiera defendiendo el esquema económico de sustitución de importaciones, sino que además hiciera de la política económica un populismo político que terminaría en 1976 con la primera de las cuatro crisis que habrían de trastornar económica y políticamente al país” (Alfie, 1998:87).

Cuando el Estado se ha visto amenazado no ha sido del todo autoritario¹⁰ con los diferentes actores sociales; es así como en 1970 Luis Echeverría Álvarez, se abre hacia la apertura política para contrarrestar los sucesos del movimiento estudiantil del 68¹¹.

Cuando se dan las transformaciones en la sociedad y en el sistema político, el Estado se ha visto incapacitado para controlar esos cambios. En el caso mexicano no sólo es posible hablar de una transición gradual que impulsa la clase dominante, sino de una transición marcada por la crisis, es decir, por situaciones económicas, políticas y sociales que enfrentan situaciones de conflicto que dificultan su reproducción.

En México, el sistema autoritario prevaleció alrededor de siete décadas desde 1929, y tenía como principio rector la supremacía estatal, y así se crearon las condiciones óptimas para la industrialización del país, este desarrollo se vio hasta fines de la década de los sesenta. Lo cuestionable vino cuando no hubo por parte del sistema político autoritario una transformación económica, es decir, generar verdaderos cambios de desarrollo y crecimiento económico, pues en realidad sólo ratificaban las viejas estructuras económicas y un régimen político que estaba consolidado desde 1940. Es así que a partir de los setenta el sistema se vuelve disfuncional por los cambios de la economía mundial.

Se venía una década de cambios trascendentales para México. Y para la década de los setenta con la llegada al poder de Luis Echeverría Álvarez comienzan a trazarse las líneas de ese cambio en la relación entre el sector privado y el Estado, una relación ya desgastada desde sexenios anteriores.

¹⁰ En términos políticos, en un sistema en el que sólo un pequeño número de individuos ejerce el poder político y tiene acceso a él

¹¹ La inconformidad de los estudiantes universitarios con la política del gobierno no comenzó en 1968, sino que aquí culminó. Protestaban porque el presupuesto del gobierno destinado a la educación disminuía cada sexenio, por lo que las escuelas se iban deteriorando, los programas no se modernizaban y los maestros, mal pagados. Ya desde 1942, bajo el gobierno de Ávila Camacho, se organizaron manifestaciones de los maestros y alumnos de las escuelas superiores (preparatorias y universidades) que protestaban contra el poco interés del gobierno en la educación. Las manifestaciones continuaron hasta que, poco a poco, los estudiantes comprendieron que el desarrollo de México se estancaba y comenzaron a exigir que se permitiera a los mexicanos intervenir en la planeación del futuro de su país. Había necesidad de una profunda reforma democrática. El gobierno respondió a la mayor parte de estas protestas con represión, los estudiantes se convertían en presos políticos. Terminó en la tragedia del 2 de octubre en Tlatelolco.

Especialmente en el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) el papel rector del Estado mexicano se une directamente al fortalecimiento de su papel económico, es decir, el desarrollo económico no se podía dejar en manos del sector privado, sino que el Estado era el que debía estar al frente de los asuntos económicos y de esta manera velar por los intereses de la comunidad. La presidencia de Echeverría estuvo enfocada a recuperar y a reforzar al Estado como rector de la vida económica, política y social después de la represión estudiantil. De hecho la intervención del Estado es más abierta y más directa, el Estado como guía para dirigir el crecimiento económico y un antídoto contra la crisis.

La nueva fuerza del Estado debería encaminarse a combatir décadas de crecimiento que habían postergado las demandas populares, combatir la falsa ideología basada en los puros indicadores económicos y no en los sociales, es por eso que intenta poner al día el papel del Estado dentro de los cambios mundiales y de la necesidad de adecuarlo a sus nuevas condiciones sociales. En este sexenio toma forma lo que podría llamarse neopopulismo¹².

De esta manera el mandato de Luis Echeverría inició con un proyecto de reformas que le quitaban peso al desarrollo económico, y que viraban más hacia el aspecto social¹³ y la parte más importante reforzar el papel del Estado en la economía y legitimar a éste como otro objetivo principal.

Las acciones de Echeverría produjeron una respuesta de los empresarios que cambió permanentemente el equilibrio entre el Estado y el sector privado. "Las acciones del presidente tuvieron muchas consecuencias para el sector privado: en primer lugar, la comunidad empresarial nacional se unió a las empresas extranjeras para enfrentarse al sector público, como se puso de manifiesto en sus esfuerzos por cambiar el liderazgo del CMHN. En segundo lugar, y lo que es más importante, los empresarios realizaron algunas acciones para frenar la economía, lo que contribuyó a crear una situación cercana a una crisis política, al final del régimen¹⁴ de Echeverría. El sector privado se

¹² Es un tipo particular de liderazgo político que a grandes rasgos, se caracteriza por tres elementos: un discurso crítico hacia las elites establecidas, el uso de técnicas avanzadas de ingeniería política (encuestas, grupos, etc.), la preponderancia de una mediación entre líder y masas a través de los medios de comunicación de masas (preferentemente la televisión). Un fortalecimiento del Estado para iniciar una nueva etapa de desarrollo cuyos objetivos serían atenuar las diferencias sociales crecientes en el país, heredadas del crecimiento anterior.

¹³ Mayor empleo, equidad en la distribución del ingreso y un mejor nivel de vida.

¹⁴ Por régimen político se entiende al nivel de las instituciones y normas jurídicas que regulan el acceso, la distribución y el ejercicio del poder político, cuando se da el cambio político, existen transformaciones en las estructuras del régimen, es decir en los valores, normas y estructuras de autoridad.

unificó en su oposición a la política gubernamental en mayor medida que en cualquier época anterior. Esto hacía más difícil que el gobierno enfrentara a un grupo de empresarios con otro, una técnica usada tiempo atrás por los líderes políticos mexicanos para disipar la influencia política potencial de los empresarios. A causa de la crisis de legitimidad surgida después de 1968, y de las nuevas direcciones asumidas por el régimen en su política económica, el propio gobierno estaba dividido, lo que lo debilita frente al sector privado, lo que alentó a los empresarios a fortalecer sus propias organizaciones”(Ai Camp, 1990:42). Cuando la comunidad empresarial logró que sus organizaciones maduraran más consiguieron que sus ideas fueran tomadas en cuenta en las altas decisiones de la nación.

El primer caso de enfrentamiento entre el Estado y los dueños del capital privado en el gobierno de Luis Echeverría comenzó el 15 de diciembre de 1970, a dos semanas de haberse iniciado aquella administración, con motivo de la reforma fiscal¹⁵.

“En el aspecto económico las medidas concretas que se pusieron en materia de política fiscal: el impuesto de lujo del 10%, las reformas para 1972 las cuentas de cheques y el pago de impuestos y el proyecto de impuestos patrimonial, en la política laboral: los iniciales aumentos salariales, el salario mínimo de emergencia de 1973, la introducción de la revisión anual de salarios en 1974, el reparto de utilidades, la creación de fonacot y el proyecto de escala móvil de salarios” (Martínez, 1984:168).

En el aspecto político también hubo cambios a lo que Martínez llama “apertura democrática”, en cuanto a la libre expresión, reforma electoral y sobre todo un discurso populista iniciado por Echeverría. Todos los acontecimientos que se fueron dando desde el inicio del sexenio provocaron un gran descontento en el empresariado mexicano, pues su condición ya no era la misma que en épocas anteriores en donde el control lo tenía el Estado, para la década de los setenta el sector empresarial se encontraba con mayor solidez para enfrentarse al Estado. Sin embargo, este sector entraba en conflicto con lo propuesto por el presidente el cual limitaba el poder del empresariado y mayor presencia del Estado, para este periodo el sector privado tomó más fuerza y era este sector el que comenzaba a condicionar al Estado.

“Enseguida las organizaciones empresariales se manifestaban oponiéndose alegando que no se les había hecho llegar como en sexenios anteriores el comunicado sobre tales

¹⁵ La reforma fiscal tenía como objetivo el fortalecer financiamiento al Estado, para que éste con recursos internos y alternativos al endeudamiento externo pudiera tener éxito en el logro de las grandes metas reformistas. El programa reformista del presidente Echeverría despertó a los empresarios del letargo en que se encontraban, con lo que se presenció el ataque directo y la formulación de diversas amenazas.

reformas, es así como la COPARMEX, CONCANACO, CONCAMÍN y CANACINTRA mediante su presidente Roberto Guajardo Suárez hicieron llegar al gobierno su inconformidad” (Martínez, 1984: 174).

Por esta situación el empresariado opta por nuevas pautas de participación frente a un ejecutivo que no daba respuesta a su demanda de no haber sido consultado y que el gobierno declarara que no había ley que lo obligara.

El sector privado ante estos sucesos mostraba su inquietud ante la gran incertidumbre que según ellos estaba viviendo el país en materia económica, ya que para 1973 el Estado cada vez más invadía su territorio. “Se estaba creando un ambiente de recelo, incertidumbre y desconfianza dentro del sector privado, decía el presidente de la CANACINTRA, y que era evidente la intervención del Estado en campos perfectamente definidos por el sector privado”(Martínez, 1984: 176).

Comienza un gran distanciamiento entre el sector empresarial y el Estado y si a esto se le agrega la muerte del empresario Eugenio Garza Sada perpetrado en Monterrey en 1973, el alejamiento se vuelve aún más grande. “Y comenzó la ofensiva empresarial contra el gobierno culpándolo de la violencia por alentar actitudes extremas, ante esta situación el sector empresarial demostraba su típica incapacidad para comprender la política y sus implicaciones. Muchos de ellos no se daban cuenta de que, con limitaciones, la apertura y en buena medida el populismo habían contribuido a restarle apoyos y a dividir a la izquierda” (Medina, 1995:228).

Sin embargo, a pesar de toda esta revuelta, se llegaron a acuerdos positivos, el sector obrero como el empresarial dieron su apoyo al régimen, y como prueba, el sector privado invertiría para 1974 78 mil millones de pesos como confianza a la economía mexicana.

“En el mismo sentido el resto de los empresarios organizados se manifestarían en enero de 1974 en forma conjunta, los dirigentes de la COPARMEX, CONCANACO y la CONCAMÍN afirmaron que se había reestablecido el clima de confianza que el año pasado se había perdido a causa de los proyectos del gobierno contra la inflación y la carestía, y a las demandas obreras, y sobre todo la incertidumbre de la política fiscal” (Martínez, 1984:189).

Pero cabe señalar que siempre ha habido altibajos entre el Estado y el sector empresarial, y el año de 1975 no es la excepción, surgen nuevos conflictos por la reforma fiscal de ese año y por la iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos.

En la primera el descontento del sector privado era por el rumor que corrió por todo el país (rumor provocado por un grupo del sector privado) sobre el impuesto patrimonial como parte de un proyecto de reforma fiscal integral, la cual indicaba que el sector privado tenía que rendir cuentas ante la Secretaría de Hacienda de todos sus bienes tanto en el país como en el extranjero, que dependiendo del monto de su capital era la contribución que tenían que dar a esta dependencia.

Sobre la Ley General de Asentamientos Humanos se quería evitar el desorden por la expansión de las zonas urbanas, “el Secretario de Gobernación de la cámara de diputados aclaraba que por ningún motivo se trataba de expropiar o confiscar, sólo se trataba de reglamentar el uso del suelo” (Martínez, 1984:197).

A pesar de estas declaraciones el sector privado no quedó conforme y tanto el presidente de la CONCANACO y de la CONCAMÍN manifestaron su total desacuerdo alegando lo incierto del proyecto, y por lo consiguiente se divulgó que los propietarios serían desposeídos de sus bienes y que serían repartidos entre los más necesitados y si el inmueble era muy grande, la habitarían también personas ajenas a la casa. Posteriormente el rumor fue aclarado para tranquilidad del sector privado.

Por todos estos problemas y por la ampliación del Estado como rector de la economía, los empresarios vieron amenazados sus intereses fijando su posición ante el gobierno, con una crisis de confianza, y crean un organismo que es privatista: el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en 1975, como organización cúpula del sector privado. El CCE queda integrado por las principales organizaciones empresariales del país: CONCANACO, CONCAMÍN, COPARMEX, AMIS, ABM y CMHN. Sólo la CANACINTRA decidió no formar parte de la CCE además sus dirigentes manifestaban públicamente su rechazo por los puntos de vista del CCE. Esta organización empresarial salió a la luz pública con el propósito de dotar al empresariado de una estructura, una organización, y una estrategia y un discurso que les permitiera aglutinar y unificar el heterogéneo y disperso mundo empresarial; todo ello con la finalidad de contar con una representación altamente centralizada que les proporcionara una voz común ante las instancias gubernamentales.

Se creó la CCE y para agosto de 1976 quedaría formalmente constituida, y como primer propósito el de coordinar las actividades y las actitudes de todos los organismos empresariales, que pueden no coincidir, ya que fueron creados para representar intereses sectoriales diferentes. Ya que surge como respuesta a todos los sucesos políticos, sociales y económicos que acontecieron en este periodo y sobre todo por esas Reformas

de Ley que el presidente Echeverría envió al Congreso sin la participación del sector privado. Esta organización que surge sin el amparo del Estado presenta un proyecto con el propósito de influir en la toma de decisiones del gobierno del próximo sexenio para defender los intereses del sector privado. Durante este periodo de Luis Echeverría el conflicto entre empresarios y gobierno fue constante, lo que motivó la modificación de la relación tradicional entre ambos actores y la creación del CCE como organismo cúpula y la inauguración del arribo de los empresarios a la política pública.

Este consejo tomó cartas en el asunto y solicitó la corrección de 23 de los 47 artículos de la iniciativa que el presidente envió al congreso, es así como el proyecto es modificado. El gobierno declaró que sólo buscaban una mejor calidad de vida tanto urbano como rural. “Este organismo se presenta como vocero de la clase empresarial, aunque en términos generales expresan las opiniones del empresariado económica o políticamente más agresivo” (Luna, 1992:48).

Hay que señalar que las modificaciones se hicieron gracias a la presión del sector empresarial y no por que el gobierno haya analizado bien los artículos del proyecto y que beneficiaran a ambos y así despejar la incertidumbre sobre la relación entre estos dos actores. Y aunque hubo cambios en la reforma fiscal, esta situación puso de manifiesto la mala relación entre el ejecutivo y los dueños del capital, y pone en evidencia como poco a poco el sector privado va ganando terreno y poniendo límites al régimen. De esta manera las élites económicas iniciaron una lucha por la hegemonía ante el Estado, un Estado que se empeñaba por detentar el poder en las cuestiones económicas del país, un sector privado que demostraba que se enfilaba como clase social.

El final del sexenio de Luis Echeverría Álvarez fue muy conflictivo en las relaciones sector empresarial y sector público, pues a finales de 1975 hubo un gran problema con los agricultores y los campesinos, por la invasión de predios en Sonora por parte de campesinos, es así como hubo una serie de acusaciones hacia la COPARMEX como principal adversario del gobierno. En este periodo una parte del sector empresarial y sobre todo del norte del país se interesaron por incursionar en la política y pusieron sus ojos en el Partido Acción Nacional (PAN). El régimen político mexicano no sólo impidió la existencia de partidos políticos de oposición, sino que alentó la presencia de algunos que, por cierto, no representaban peligro alguno para su permanencia en el poder; los empresarios, durante gran parte de la existencia del régimen autoritario mexicano, pudieron desarrollar ciertos vínculos con los partidos, especialmente con el

Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y a partir de la década de los ochenta, en el contexto de la crisis económica, los empresarios mexicanos estrecharon y fortalecieron sus vínculos en el Partido Acción Nacional (PAN).

También para finales del mandato de Luis Echeverría y para ser exactos en septiembre de 1976, hubo una devaluación en la cual el gobierno tomó la decisión de dejar el peso flotar, y por demanda del sector empresarial se mantuvo una paridad, de esta forma el sector empresarial comienza a penetrar en la toma de decisiones no sólo económicas sino también políticas, y se ve una disminución del poder estatal.

“Se hizo claro que la balanza de pagos estaba en un severo desequilibrio, así pues era necesario tomar una acción drástica. De todas formas el gasto público continuó elevándose para completar los programas antes de fin de sexenio, pero las tasas de crecimiento de la producción agrícola y manufacturera habían declinado seriamente. El sector privado estaba pagando campañas de rumores en torno a las reformas a la propiedad rural y urbana, nacionalización de transnacionales y congelamiento de depósitos bancarios. Estas campañas resultaron ser estrategias efectivas de desestabilización. De esta manera, la fuga de capitales asumió proporciones desastrosas., dentro de este contexto el Banco de México finalmente retiró su apoyo al peso el 31 de agosto de 1976 para que la moneda encontrara su propio nivel de flotación. Esta decisión trajo nuevamente a la escena mexicana la intervención del FMI cuando el periodo de Echeverría estaba terminando” (Bazafiez, 1999:148).

Después de tantos años de estabilidad monetaria y crecimiento sostenido, en el final del periodo de Luis Echeverría (1970-1976), el peso se devaluó, se presentó una crisis económica y con esto una fuga de capitales del país. “En estas circunstancias hicieron renacer el encono que tenía guardado el grupo Monterrey contra el presidente Echeverría y acentuaron la paranoia gubernamental al incrementarse los rumores que muchos en el gobierno consideraban una campaña orquestada por los grandes capitales regiomontanos” (Medina, 1995:231). La administración de Luis Echeverría inmediatamente pidió la destitución del gobernador de Nuevo León por tener una relación muy estrecha con el Grupo Monterrey.

Las tensiones con los empresarios se agudizaron y es claro que para ese momento las transformaciones en la economía y la sociedad ya ejercían un gran condicionamiento sobre la acción estatal

Un par de semanas antes de entregar el poder Luis Echeverría Álvarez resolvió el problema de la invasión de los predios por parte de los campesinos y expropió miles de

hectáreas en el Estado de Sonora. Para cuando llegó a su término el mandato de Luis Echeverría en 1976, las tensiones iban en aumento a medida que el gobierno empezaba a extender su papel en la economía, comprando empresas operadas por particulares y emprendiendo políticas que iban en contra de los intereses del sector privado.

“A lo largo del sexenio el proceso de politización experimentado por los empresarios puede caracterizarse de la siguiente manera: primero por un central cuestionamiento de la intervención del Estado en la economía. Segundo, la posición empresarial no solamente se refiere a los contenidos de las políticas gubernamentales, sino que también involucra las modalidades de la participación privada en la toma de decisiones que en este periodo se dirige tanto a la restitución de los mecanismos de consulta como a enfatizar el carácter privatista (frente a la estatal) de sus órganos de representación. Tercero, con una base de apoyo de carácter regional, la facción radical, representada por el Grupo Monterrey, va imponiendo su dominio, en que en el seno de las organizaciones empresariales se expresa en el desplazamiento de dirigentes nacionales de la facción moderada por parte de los líderes con posiciones más duras. Cuarto, el tránsito de la negociación al enfrentamiento significa pasar de una acción de clase y como movimiento social de derecha. Quinto, en el plano ideológico, aparece una nueva demanda política, la de sujetar las decisiones públicas a principios de racionalidad técnica. Sexto, sectores de la facción radical convocan a la creación de un partido empresarial” (Luna, 1992:46).

Fue un sexenio muy accidentado comenzando por las enérgicas medidas tomadas por parte del gobierno en el conflicto estudiantil del 68 (que repercutió en este sexenio), la política económica de austeridad y el rompimiento con el sector privado por su política populista. Todos estos acontecimientos fueron suficientes para crear un nuevo régimen que se encontraba ya agotado y que no encajaba en los cambios que la transición hacia la democracia exigía.

RUPTURA EN LAS RELACIONES ENTRE EL SECTOR EMPRESARIAL Y GOBIERNO EN LOS INICIOS DE LA CRISIS EN EL SEXENIO DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (1976-1982)

José López Portillo asume el poder en una situación precaria ensombrecida tanto en lo económico, social y político, que desde la época de Lázaro Cárdenas no había en México un relevo presidencial tan dividido.

“Ante esta situación, de crisis política al interior del bloque dominante, el principal desafío para el gobierno de López Portillo 1976-1982) fue restablecer la confianza empresarial en el Estado. Su invitación a las élites empresariales se observa en los proyectos de coinversión que firma con los principales grupos económicos nacionales, es el caso de los convenios firmados con el grupo Monterrey que en el sexenio anterior fue la fracción del empresariado que se mostró más agresiva ante el Estado” (Montesinos, 1992:108).

Para este sexenio (1976-1982) se predicaba una mejor relación entre gobierno y los dueños del capital, gracias a los cambios que se esperaban en este periodo, la transformación del régimen político y del aparato administrativo mediante las reformas político administrativas que en el sexenio anterior no acontecieron y que en esta etapa se estaba viviendo la crisis administrativa del periodo pasado.

“La crisis económica y política bajo la cual se dio la transferencia de poderes en 1976, también había golpeado al aparato administrativo del gobierno federal. No sólo en los seis años anteriores este aparato había crecido desmesuradamente, tanto en el sector central como para estatal, sino que se había puesto en evidencia varios vicios: descontrol administrativo, ineficacia y corrupción” (Medina, 1995:232). Y para combatir el aparato administrativo corrupto se hecho mano de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios de la Federación del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios del Estado y que su objetivo es impedir que los funcionarios puedan infringir la confianza que se ha depositado en ellos y darle mejor poder al Congreso para supervisar la honradez de todos los funcionarios en todas las áreas de gobierno.

“Para salir de la crisis del aparato administrativo se precisaba modernizar la burocracia. Con la reforma administrativa, a parte de achicar y hacer más racional el aparato público, se persiguió introducir la racionalidad y la planeación” (Medina, 1995:232). Para acabar con la irracionalidad del aparato administrativo se creó la

Secretaría de Programación y Programación (SPP). “Es esta Secretaría la que tiene la difícil tarea de conciliar un plan que acredite la eficacia con que se alcanzan las metas, la eficiencia con que se logran y la congruencia con los principios filosóficos del sistema” (Luna, 1998:56).

Este proyecto fue un avance en la reforma política que expidió José López Portillo, como la modificación de varios artículos de la Constitución Política Mexicana y la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), esta ley se promulga con el propósito de ofrecer un campo más amplio a las manifestaciones de las distintas corrientes y así promover el pluripartidismo.

“Si bien en el gobierno de José López Portillo el país presentó los síntomas del agotamiento del modelo desarrollista en donde el Estado era el principal agente económico, y se prefirió optar por el reforzamiento y la ampliación de las actividades económicas del Estado, dado que las arcas públicas recibieron caudales considerables de divisas como consecuencia de la explotación de los ricos yacimientos de crudo que se encontraron en el sureste del país” (Loyola, 1996:17).

Los primeros cuatro años del gobierno de José López Portillo fueron de reforma, reconciliación y avance económico gracias a las reservas petroleras que garantizaron un flujo constante de recursos del exterior, vía exportación de crudo, deuda e inversiones. El petróleo resolvería, pues, lo que desde Díaz Ordaz pesa cada vez más en la economía mexicana, es decir, la falta de capital nacional con lo que podrían hacer las inversiones que requería y demandaba el otro México que despuntaba con su alta demografía, su industrialización trunca, la falta de oportunidades en el campo, etc. Por eso, para López Portillo, la riqueza petrolera y su “idónea administración” resolverían el nudo histórico del desarrollo del desarrollo mexicano.

El petróleo sería el gran talismán que haría factible la nueva riqueza nacional y se convertiría en la punta de lanza del desarrollo por conducto de la exportación de hidrocarburos y que sería una gran entrada financiera hacia México. Durante este sexenio, se realizaron grandes inversiones en lo que se consideró eran las estratégicas más dinámicas y productivas como el mismo petróleo, el acero, la química, la petroquímica, los fertilizantes y la electricidad. “El desarrollo de estas ramas sería la base de este despegue modernizador”.

“La ampliación de las actividades estatales en áreas definidas como prioritarias ante la urgencia de los problemas derivados de la situación económica, fue de manera mucho más dramática, sometida a la lógica del conflicto entre el gobierno y los empresarios.

Entre los enfrentamientos entre estos dos actores, son de mencionarse las relativas a las actividades de la Conasupo¹⁶ y Proquivemex.¹⁷

Los intentos de regulación del mercado de subsistencias a través de la ampliación y reestructuración de la Conasupo se vieron afectados por las campañas en contra de las actividades de esta empresa descentralizada y por presiones directas del comercio privado organizado en la CONCANACO, de algunos caciques rurales y empresarios nacionales productores de básicos. El sector privado canceló el proyecto de farmacias Conasupo, restringió de manera sustancial la creación de centros comerciales y la elaboración de productos de consumo básico, y ejerció fuertes presiones sobre el control de precios. Proquivemex había incluido entre sus proyectos el entrar a la producción y exportación de productos farmacéuticos controlados por las campañas transnacionales. Este proyecto se canceló por la presión de las compañías extranjeras, que lograron el apoyo del sector privado nacional" (Luna, 1992:40).

Esta crisis que se dio en todos los aspectos, por supuesto que afectó la relación entre el Estado y el sector privado, el haber dado reforzamiento al Estado y sobre todo en el aspecto económico sin darle a este aparato público una verdadera estructura en la planeación de sus políticas públicas provocó fracturas entre estos dos actores.

Las relaciones entre el sector privado y el Estado se encontraban a su nivel más bajo desde 1920, y la comunidad empresarial decidió adoptar una actitud cautelosa frente al nuevo gobierno. La relación entre estos dos actores siguieron tensas, sin embargo el Estado necesitaba del sector privado para así fortalecer su modelo económico y López Portillo reconoció que el papel del sector empresarial era definitivo para la vida económica y política del Estado mexicano. Por tal motivo la relación entre el Estado y sector empresarial se transformó, y si después de la Revolución Mexicana el sector privado dependió de las decisiones Estado, la situación se modificó para este sexenio y era el Estado el que poco a poco le estaba cediendo poder al sector privado en materia económica. El caso de los agricultores en Sonora que en noviembre de 1976 fueron despojados de sus tierras y que la nueva administración los indemnizó y ofreciéndoles un nuevo proyecto; otro ejemplo de ello fue la cancelación a principios de 1977 del derecho que tenía el Estado de explotar los minerales para la producción de fertilizantes,

¹⁶ Comisión Nacional de Subsistencias Populares.

¹⁷ Empresa creada para el control de la comercialización de la raíz del barbasco, usado en la producción de hormonas sintéticas

así como del hierro y el carbón, como una condición para llegar a buenos acuerdos en esta administración.

El presidente tomó nuevas medidas para crear nuevos acuerdos con los empresarios y una medida importante es la de incluir a los empresarios en la toma de decisiones del gobierno y así tener más participación y llegar a buenos acuerdos que beneficien a los empresarios y al gobierno. Esta nueva gestión a la política económica le da una nueva ruta en la liberalización de los controles gubernamentales.

Una liberalización política que afectó en forma directa las relaciones entre el sector privado y el Estado.¹⁸ “La filosofía de López Portillo de expandir la oposición en particular de los partidos de izquierdistas, alentó a los empresarios activistas a explorar el incremento de su participación en la arena electoral. Es así como empresarios consideraron seriamente la fundación de un nuevo partido político, hacia la mitad de su mandato el presidente abrió la arena política a más grupos, agudizó el debate político entre la izquierda y la derecha, e hizo que los empresarios cobraran mayor conciencia de la importancia de la participación política electoral” (Ai Camp, 1990:45).

Con este proceso liberalizador se visualizaba un sistema de partidos, con la apertura de nuevos partidos políticos por la reforma política que en 1977 introdujo el gobierno de López Portillo¹⁹. “Podría decirse que la respuesta estrictamente institucional a la crisis de 1968 se produjo en la administración de José López Portillo (1976-1982) mediante la reforma política, que incluía la legalización de los partidos de oposición y de las asociaciones políticas (Luna, 1992:35).

La presencia del sector empresarial dentro de la política pública, comienza a tener efectos en la toma de decisiones de este grupo sobre el Estado. Cuando el sector privado intervino en la decisión del ingreso de México al GATT²⁰ por no convenir a sus intereses. La CANACINTRA se opuso al acceso al GATT en 1980.

¹⁸ la liberalización política que en sus comienzos le fue funcional al régimen y que tiempo después le fue disfuncional a éste, hasta desbocar en una crisis política de grandes magnitudes y pensar en un cambio político con tintes democráticos.

¹⁹ La reforma consistió en flexibilizar los criterios legales para permitir la participación de nuevas agrupaciones políticas, se amplió en número de diputados y se modificó la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Abrir válvulas de escape a las tensiones sociales e institucionalizar el descontento social por la vía partidaria.

²⁰ GATT: Acuerdo General Sobre Comercio y Aranceles fue creado en la Conferencia de la Habana en 1947 y está considerado como el precursor de la Organización Mundial del Comercio. El GATT era parte del plan de regulación de la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que incluía la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional. La finalidad de la inclusión al GATT era la eficacia en el aparato productivo a través de la apertura comercial. El aumento del ingreso real y de la demanda efectiva se lograría entonces mediante la reducción sustancial de aranceles y otras barreras impuestas al comercio exterior.

“El sector privado pagó un precio por su cooperación con el gobierno mexicano, López Portillo buscó y obtuvo un entendimiento con los sectores más progresistas de las comunidades empresariales privadas, nacionales y extranjeras. El éxito inicial del presidente aunado al aumento extraordinario de los ingresos petroleros hizo resurgir la unidad interna dentro del Estado. Por otra parte, se agudizaron las divisiones dentro del sector privado, y los desacuerdos entre diversas facciones quedaron a la vista del público” (Ai Camp, 1990:44).

Después de 1979 declinó rápidamente la calidad del vínculo entre el sector privado y el Estado, y culminó con un grave rompimiento con la decisión del presidente de nacionalizar la industria bancaria. Desde el sexenio anterior ya se habían dado rumores de la nacionalización de la banca pero fue seis años después con José López Portillo, y que anteriormente a este suceso en 1981 se suspendió el crédito internacional al gobierno mexicano. Y fue precisamente en este año cuando se inicia el caos petrolero y se incrementan las tasas de interés de los préstamos internacionales, y una gran crisis financiera, y se descubre el agotamiento de un régimen que aún en este sexenio continuaba con características de crisis de racionalidad administrativa que el periodo anterior.

A principios de marzo de 1982, semanas después de la devaluación del peso y la retirada del Banco de México del mercado de cambios a mediados de Febrero el presidente José López Portillo solicitó que se elaborara un estudio donde se analizaran todas las opciones de política económica para hacerle frente a la agudo problema del peso y su valor respecto al dólar tan agravada por la salvaje especulación y fuga de capitales que desde 1981 se habían observado en México, y en los últimos meses de ese año y las primeras semanas de 1982 alcanzaba niveles inusitados.

El 1 de septiembre, el presidente de José López Portillo en su sexto y último informe de gobierno anunció la decisión de nacionalizar la banca y establecer el control generalizado de los cambios. Los decretos respectivos se habían firmado horas antes en la residencia oficial de los pinos.

“La crisis de los precios del petróleo en el mercado internacional pronto colocó al gobierno lopezportillista en una situación de fuerte crisis financiera, situación que se hizo más caótica en la medida que la fracción financiera privada provocó la dolarización de la economía, la especulación y la fuga de capitales. Su falta de compromiso propició que el gobierno de López Portillo decretara la nacionalización de la banca el 1º. De

septiembre de 1982. La justificación gubernamental se sustentó en el desorden financiero creado por la banca nacional privada” (Montesinos, 1992:108)

En 1982 el presidente de México nacionalizó la banca en medio de una crisis económica generalizada provocada por la caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso, el incremento de las tasas de interés y el país se declaró prácticamente en suspensión de pagos. Esta decisión fracturó el pacto entre el gobierno y los empresarios. Siendo la comunidad empresarial la que culpaba al régimen autoritario como el causante de la recesión, inflación y la devastación económica.

Después de que Portillo en 1982 nacionalizó la banca hubo una ruptura entre el sector empresarial y el Estado, y una gran desconfianza que el empresariado mexicano le tuvo al aparato público. Si en el sexenio de Luis Echeverría el conflicto entre empresarios y gobierno fue constante, llegó a su punto más alto bajo el gobierno de José López Portillo con la nacionalización de la banca.

“La nacionalización de la banca representa el último intento de la burocracia política por mantener el papel hegemónico en la conducción de la Nación” (Montesinos, 1992:108). Pero también presenta el agotamiento de un modelo de desarrollo y un intervencionismo estatal agudo que no era benéfico para los intereses del sector empresarial.

“La nacionalización de la banca tuvo el efecto de crear un vacío institucional al incidir en el espacio privilegiado de las relaciones entre el Estado y los empresarios: el aparato financiero. Además puso de manifiesto la capacidad gubernamental para tomar una decisión unilateral y ratificó el modelo interventor que tradicionalmente había preocupado a los empresarios radicales. Asimismo la desarticulación de la facción hegemónica representada por la fracción financiera, abriría un conflicto interno en torno al liderazgo de clase” (Luna, 1992: 69).

A partir de este momento el sector empresarial comienza con la búsqueda de un conjunto de valores y procedimientos que garanticen su introducción a la arena política y que también garanticen su participación efectiva en la toma de decisiones; y de esta forma tener un liderazgo de manera más permanente y seguro.

En varias ciudades de la República mexicana el CCE convocaba a reuniones entre la cúpula empresarial y el presidente electo para definir el perfil de la nueva política empresarial. Y en su discurso, el sector empresarial apelaba hacia la democracia, ante un Estado autoritario y un régimen político ya de por sí desgastado que no funcionaba a

sus intereses. Un sector privado que quería ser reconocido como actor político legítimo del sistema.

“En el plano ideológico los elementos más específicos del nuevo discurso empresarial aducen que la crisis económica se originó en la irracionalidad, la ineficiencia, la corrupción y la demagogia del propio gobierno. De manera particular, en el diagnóstico empresarial se sostenía que la crisis había resultado de la estrategia económica aplicada por el gobierno de Luis Echeverría, caracterizada por un excesivo gasto público. Y de aquí la fuerte demanda empresarial de implantar un nuevo modelo de desarrollo: la economía social de mercado” (Luna, 1992:70).

“De manera más severa que en el sexenio echeverrista, el sector privado nacional manifestó de muy diferentes maneras su descontento con el sistema político mexicano y en especial con la figura presidencial y prácticamente se rompió cualquier tipo de confianza con el Estado” (Alfie, 1998:65).

El sector empresarial señalaba que no solamente había crisis económica sino que también política, criticaban al presidencialismo, al partido hegemónico y al corporativismo como obstáculos para la transición hacia la democracia. El empresariado sostiene que lo que falla es el sistema.

A la nacionalización de la banca, vinieron acusaciones del sector privado hacia el gobierno, calificándolo de que la medida tomada fue de carácter socialista o totalitario. El empresariado veía injusto que un solo hombre tomara la decisión de nacionalizar la banca. Es así que los dueños del capital convocaron a la sociedad civil a participar en la política para terminar con los graves errores en la toma de decisiones del sistema político mexicano.

“Así la intervención del Estado y en particular la nacionalización de la banca representaba la antesala del Estado totalitario. El presidente de la COPARMEX afirmaría que la nacionalización bancaria era uno de los elementos fundamentales del proyecto socialista. Pero en realidad lo novedoso del discurso empresarial estaba en la equivalencia que se establecía entre el Estado intervencionista y el presidencialismo, el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción, el unipartidismo, el corporativismo y el populismo” (Luna, 1992:71).

Lo importante para el sector empresarial, no era modificar una sola política, sino la forma del régimen y más allá, modificar el sistema político mexicano. El empresariado mexicano dirigía sus críticas al Estado totalitario que se contrapuso al Estado

democrático; al Estado intervencionista que se opuso al Estado liberal, que por lógica tendería a la democracia.

“Desde la perspectiva empresarial, el presidencialismo no sólo habría de estar limitado por un efectivo juego de partidos y balance de poderes; requería también la aplicación de criterios técnicos en la toma de decisiones, y su sujeción a las leyes de mercado, como medio para evitar la discrecionalidad gubernamental, la corrupción y las tentaciones populistas. Los empresarios reconocen así que todos los actos a través de los cuales el empresario solicita, promueve, critica, concierta, son actos políticos que aceptan, rechazan o modifican la función del gobierno” (Luna, 1992: 72).

“La endeble reconciliación que logró López Portillo (1976-1982), con el sector empresarial no provocó mayores conflictos mientras el gobierno mexicano contó con los recursos financieros para llevar a cabo su programa sexenal: alianza para la producción. Sin embargo, la crisis económica acrecentada por la caída de los precios del petróleo, el endeudamiento externo y las devaluaciones, reflejaron el agotamiento del modelo populista, aunque la nacionalización de la banca representó, además de una revancha contra la fracción financiera, el último intento por mantener la figura del Estado interventor, omnipotente y omnipresente” (Montesinos, 2000:96).

“Por lo que respecta al papel del petróleo, la certidumbre de vastos yacimientos petrolíferos en el sureste del país databa de 1974, cuando esta noticia empezó a aparecer reiteradamente en los informes de la CIA al presidente de los Estados Unidos. Cuando López Portillo tomó posesión de su investidura presidencial autorizó una expresión masiva de la inversión pública con vistas a elevar la plataforma petrolera, que fue revisada e incrementada dos veces, hasta que se convirtió en un plan definitivo de inversión para el periodo 1977-1982, como parte del Plan Nacional de Desarrollo Industrial. Además, a medida que el comportamiento de los precios del petróleo se volvía más favorable, el régimen de López Portillo se desplazaba abiertamente hacia una estrategia expansionista, abandonaba el énfasis en la racionalización y la búsqueda de eficiencia que habían caracterizado el primer año de su gestión” (Rivera, 1993:86).

“La tan festejada ley electoral no iba a resolver prácticamente en nada la presencia autoritaria de un partido de Estado pero el hecho más significativo que muestra con claridad la poca disposición del gobierno al cambio de régimen, lo constituyó el olvido a los planes modernizadores y la vuelta a un populismo intolerante apoyado a una fantasiosa riqueza nacional provocada por el aumento a los precios del petróleo. Ilusión que se esfumó en 1982 dejando al país en la peor crisis desde la consolidación del

régimen revolucionario” (Alfie, 1998:65). Conjuntamente a esta situación, el Estado pierde capacidad reguladora frente a los nuevos rumbos de la política económica alcanzados con el Fondo Monetario Internacional.

La euforia de los altos precios en el petróleo apenas duró dos años, la moneda nacional se vino abajo y el desenfreno de algunos altos y bajos funcionarios que a pesar del esfuerzo por contrarrestar la corrupción administrativa, ésta siguió hasta el final y lo que había sido una locura, pronto se transformó en depresión e incertidumbre.

“El gobierno lopezportillista empezó a modificar algunas reglas propias del autoritarismo sistema político mexicano. Era una señal liberalizadora típica de inicio de un proceso de transición. Sin embargo, este inicio de transición se vio envuelto en tantas dificultades y de tal magnitud que bien podríamos afirmar que nunca existió una voluntad típica expresa del régimen para impulsar los cambios que se supone un proceso orientado a transformarlo. Si la LOPPE fue una señal típica de que la liberalización, en los hechos fue desdibujada por una serie de acontecimientos que mostraron que el régimen autoritario del Estado mexicano no tenía mucha intención de transformar su rostro. Los nacientes blandos de la elite en el poder poco pudieron, todavía con la intransigencia de los duros” (Alfie, 1998:65).

Con el gobierno de José López Portillo se desactivo la revuelta política que se vivió en México con el sexenio anterior, con proyectos económicos y políticos adoptados por el gobierno como: la reforma política y la reforma administrativa, así como el boom petrolero lograron acabar con las protestas y tensiones políticas, pero solamente retardaron los problemas estructurales que enfrentaba el aparato productivo nacional.

Entre la década de los años setenta y de los ochenta se vio transitar al país hacia nuevas concepciones sobre el papel del Estado, ya que éste y el partido único, fueron piezas claves del sistema político mexicano y de las políticas de desarrollo implantadas desde entonces y que se modificaron a partir de 1982.

Así como el movimiento estudiantil fue un parteaguas para sacar a la luz lo autoritario del régimen, del mismo modo lo fue la nacionalización de la banca. Sacar a la vista de todos el desgaste de un régimen autoritario y ver nacer un nuevo modelo de desarrollo de corte neoliberal²¹ Y es a partir de este nuevo modelo que el sector empresarial se fortalecerá poco a poco.

²¹ Bobbio señala que por neoliberalismo hoy se entiende principalmente una doctrina económica consecuente, de la que el liberalismo político sólo es una manera de realización no siempre necesario, o

“Tanto en el sexenio de Luis Echeverría como de López Portillo las principales clases sociales irrumpen en el escenario político, redefiniendo su relación con el Estado. En ese sentido se puede interpretar que en el próximo sexenio donde inicia la transición mexicana tanto las clases subalternas como la clase empresarial contienden por introducir en el Estado un proyecto de nación a fin de sus intereses específicos de clase. La puesta en marcha del proyecto neoliberal, será el catalizador con el cual se podrá probar que la correlación de fuerzas favoreció a las demandas empresariales” (Montesinos, 1992: 109).

Los alcances de la respuesta empresarial ante la nacionalización de la banca y la crisis de representación, tuvieron reacciones a lo largo del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1987). Si en sexenios anteriores el empresariado se encontraba en las fronteras de la política, ahora pisaba dentro de sus terrenos: tanto partidaria como electoral.

“La fuerte crisis económica y la fractura del bloque dominante provocada por la nacionalización de la banca constituyeron la problemática fundamental que el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid tendría que resolver en lo inmediato” (Montesinos, 1992:109)

CAPÍTULO II

EMPRESARIOS FRENTE AL NUEVO ORDEN ESTATAL Y LA TRANSICIÓN EN MÉXICO

CONTEXTO PREVIO A LA TRANSICIÓN MEXICANA

Cuando existe una fractura desde arriba, de los actores políticos que detentan el poder, una división entre los que luchan por mantener al régimen establecido que ha perdido eficacia para dar soluciones a las demandas sociales, y una élite política que trata de flexibilizar al régimen para conservar el poder, una clase política que no siempre se ha mantenido cohesionada.

Desde la independencia de México la forma de gobierno dominante ha sido el presidencialista autoritario. A partir de los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana se establece una dictadura de partido dominante que monopoliza la representación política, y un presidencialismo el cual debilita las facultades del poder legislativo y somete al poder judicial. Es por eso que hablar de la transición en México es complejo y sobre todo si se trata de una transición hacia la democracia lo es aún más.

Desde 1940 aproximadamente a 1976, en el régimen político mexicano realmente no se ejecutaron cambios, pues desde la década de 1930 primordialmente, en el mandato de Lázaro Cárdenas se estableció una relación corporativa entre el Estado y grupos sociales o de interés²². “En el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se habló de una apertura democrática, pero en realidad no se dio un proceso donde los duros dieran muestra de disminuir su dominación política autoritaria; por el contrario, la élite política se amplió al interior y cerró filas reforzando el autoritario sistema político mexicano” (Alfie, 1998:61). Es hasta 1977 cuando parte de la élite en el poder decide cambiar las reglas, ya que dentro del régimen autoritario la elite política comienza a dividirse²³, y dan paso a un cambio como lo es la transición. Cabe señalar que desde los años sesenta se veían aperturas graduales por parte del sistema político mexicano para dar salida a las demandas de los diferentes grupos sociales.

Hay autores que ubican el principio de la transición con el movimiento estudiantil de 1968, como primer suceso que marcará el cambio democrático del régimen autoritario²⁴,

²² Corporativismo es la relación formal entre grupos o instituciones determinados y el gobierno o estado.

²³ se dividen en lo que autores llaman los duros y los blandos. Los duros son aquellos que en un sentido importante creen en la legitimidad autoritaria, se oponen a negociar con la oposición y parten de la base de que un régimen autoritario es la solución adecuada para los problemas de gobierno. Los blandos dentro del régimen autoritario aceptan las democracias como en mal menor y están en la mejor disposición para iniciar diálogos con los políticos, sindicatos y otras fuerzas democratizadoras.

²⁴ A pesar que la constitución establecida desde 1917 decretaba un régimen democrático, pluralista y representativo.

pero no sucedió así. Sin embargo, el objetivo del movimiento estudiantil era cortar la autoridad del Estado, y las élites en el poder decididas a reconsolidar el régimen. A pesar que no hubo un cambio radical, el movimiento destapó el perfil del régimen autoritario. Pero es a partir de 1977 cuando se ven avances en lo que respecta a las garantías políticas y civiles, en donde hay un desequilibrio del régimen y en el cual éste viviría una crisis severa. Cuando hay un cambio significativo es en 1982, cuando el régimen da paso al neoliberalismo, y de esta forma se da la ruptura entre la élite, es decir, entre los duros y los blandos, y son éstos últimos que sin querer impulsan la apertura política y dan paso a la transición. Y es así como durante este período que abarca de 1977 a 1988 se fueron dando situaciones de apertura política, es decir, procesos de liberalización²⁵, la liberalización política establecida a finales de los setenta²⁶ indicaba el deterioro del régimen y además una crisis de legitimidad, procesos liberalizadores que en un periodo le funcionaron al régimen y que tiempo después se volvieron obsoletos agravándose hasta llegar en una crisis política. Esta apertura política que operó como un recurso para estabilizar al régimen contribuyó a nuevas prácticas políticas, puede ubicarse este deterioro en la funcionalidad de los procesos de liberalización entre 1985 y 1988, y que por primera vez se apreció una pequeña probabilidad de un cambio político hacia la democracia. Pero hay que señalar que para que se de ese gran paso hacia la democracia se tiene que transitar primero por la liberalización, en segundo lugar por la democratización²⁷ y en tercer lugar por la socialización²⁸.

“Son democráticos todos los regímenes cuyas normas vigentes prevén la protección de los derechos políticos y civiles de los miembros de la comunidad política, la existencia de competencia política o la posibilidad de oposición y la extensión de la participación” (Morlino, 1985:92).

²⁵ Por liberalización se entiende el inicio de una transición, es decir, el momento de un proceso social en el cual el gobierno del régimen autoritario comienza a modificar sus propias reglas y empieza por ampliar los derechos que protegen a individuos y grupos sociales de un país ante los actos arbitrarios cometidos por el Estado o por terceros. Procesos liberalizadores que tenían la finalidad de continuar con el régimen autoritario corporativista y mucho menos dar paso a la democratización.

²⁶ Aunque en México se vieron rasgos liberalizadores por primera vez en 1963, cuando se introdujeron las diputaciones de partidos para a través de ellos canalizar las demandas de las clases medias, y en la cual se formó una alianza entre la iglesia católica y organizaciones empresariales.

²⁷ La cual tiene como finalidad de consolidar la democracia mínima.

²⁸ Por socialización se entiende no nada más la democracia electoral, sino que también la democracia abarque lo económico y lo social, es decir, que la democracia sea para beneficio de todos los sectores sociales.

Es así como en México “las elecciones han sido la salida para el cambio político que se esperaba y han expuesto su dominio para reemplazar al régimen autoritario por uno democrático. La democracia significa cambio, competencia, pero también convivencia y tolerancia entre las posiciones distintas” (Woldenberg, 1999:7).

Otra pieza fundamental de este rompecabezas de la transición hacia la democracia es el Estado, que a través del tiempo ha modificado sus estructuras, y desde la presidencia de Lázaro Cárdenas el corporativismo tuvo su auge y que hizo que hubiera un dominio Estatal, es decir, gracias al corporativismo el Estado manejaba a los distintos grupos de acuerdo a su interés²⁹, ya que era el que tomaba las decisiones y que gracias a esa autoridad estatal, estructura política autoritaria y corporativista se llegó a un presidencialismo autoritario, donde todo el poder estaba concentrado en la figura presidencial.

“El Estado no sólo debía mantener el orden interno o defender al país frente al exterior, sino que también debía ser el núcleo generador de equilibrio entre débiles y poderosos, esto es, conciliador de intereses antagónicos antes que representante de alguno de ellos en particular” (Loaeza, 1989:28).

Sin embargo el Estado no siempre logró controlar a los diversos grupos, y un ejemplo de ello es el sector empresarial; y es así que creó la COPARMEX. Cuando Lázaro Cárdenas creó a esas organizaciones empresariales el sector privado era endeble, pero al tener más madurez el empresariado fue formando otras organizaciones para proteger sus intereses, y además en muchas ocasiones tuvo discrepancias con el gobierno en materia de política económica. Cabe señalar que desde los años sesenta el sistema político mexicano fue respondiendo con aperturas progresivas a las demandas de participación de diferentes grupos sociales.

“Sólo con el presidente Salinas hubo cierto interés por estructurar la relación corporativista en respuesta a las promesas de Salinas de modernización política y democracia. Los observadores sostienen que el corporativismo es contrario a la democracia, y que el mayor obstáculo al funcionamiento de ésta ha sido la continuidad de las estructura corporativista desde Cárdenas y sus sucesores” (Ai Camp, 1990:149).

A pesar de que la transición en el caso mexicano se dio desde la cúpula del poder, y que sólo fue para mantener al régimen los convenios y las reformas pactadas hicieron factible la transición mexicana. Se ha visto el agotamiento de un régimen político que

²⁹ Lo que buscaba el general Lázaro Cárdenas sí era fortalecer al Estado, pero para favorecer al trabajador y al campesino, sin embargo lo que se conformó ha beneficiado a la clase media y a los ricos.

estaba fundado en la dinámica de un partido de un partido hegemónico y un presidencialismo, como dos piezas que se han reforzado mutuamente y que hacían viable todo un sistema autoritario que tenía el control del liderazgo político nacional y también el control corporativo de las cúpulas de las principales centrales obreras y campesinas. Fue un sistema establecido en 1929 y que se recreó bajo el crecimiento del Estado como centro del devenir económico y político del país.

INICIOS DE LA TRANSICIÓN EN MÉXICO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO (1982-1988)

“El relevo presidencial efectuado en diciembre de 1982 en circunstancias difíciles por la aguda crisis económica y el gran distanciamiento de los empresarios con el gobierno. Si bien la crisis se expresó en el descenso de la productividad general, el crecimiento del desempleo la galopante inflación que contrae el ahorro interno y la inversión, el decrecimiento del ingreso nacional y el desequilibrio financiero” (Millán, 1998: 158).

La crisis de tan largo periodo tenía que ser superada y de inmediato De la Madrid puso programas emergentes para contrarrestar la crisis económica, y un ejemplo de ello es el Programa Inmediato de la Reordenación Económica (PIRE). Lo que este programa buscaría sería mejorar el área económica, como la inflación. De hecho este programa se encargaba de los principales ajustes pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre de 1982, y fueron ampliamente aprobados por los dirigentes empresariales y la política económica se fue convirtiendo en el símbolo de la recuperación de la confianza entre empresarios y gobierno. Se lograron resultados importantes con el FMI, y la única condición de este organismo para la reestructuración de la deuda fue, un cambio estructural en las reformas del país, y una recomendación de estabilidad económica y liberalizar el comercio. Con la transferencia de poder, no nada más se dio este cambio, sino una verdadera transformación.

“La transición inicia con el gobierno de Miguel de la Madrid. Algunos analistas políticos marcan el inicio en 1968 después de la matanza de Tlatelolco bajo la consideración que a partir de entonces se construye una nueva alianza social; y otros en 1977 cuando el gobierno de José López Portillo promulga la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE); en el primer caso, pensamos, resulta difícil establecer el inicio de una transición cuando desde el poder no se observó la menor voluntad política de intentar un cambio de régimen, cuando más allá del discurso no se creó en la élite política un grupo de blandos dispuestos al cambio; en cuanto al segundo caso, ciertamente la construcción de una ley como la LOPPE se observa como un signo de liberalización sin embargo como bien sabemos con frecuencia en México la palabra jurídica es palabra muerta; no es sino hasta el 1 de diciembre de 1982 que el poder legal asume la determinación de transformar el régimen nacionalista por otro que al menos en lo económico adquirió un perfil claramente neoliberal. A partir de este momento se

constituye en la élite política un grupo de blandos que impulsará la transición” (Alfie y Méndez, 1998: 81).

“La administración de Miguel de la Madrid impulsó una nueva política económica sustentada en el acotamiento del Estado en el terreno de sus actividades económicas, en el estímulo del capital bursátil como estrategia de captación de recursos económicos frescos, principalmente foráneos, en la diversificación de las exportaciones y en la búsqueda de otro tipo de participación de México en los mercados mundiales. Como remedio a la crisis se fueron delineando ajustes en el modelo económico en donde el predominio público en la económica y el proteccionismo fueron cediendo su lugar a una economía más abierta que estaría determinada por los agentes económicos privados” (Loyola, 1996: 18).

México comienza una nueva era en la reestructuración del Estado; una reorganización en la economía; apertura en el mercado nacional; eliminación de las barreras comerciales; privatización de las empresas públicas y propiedad del Estado, así como amplias reformas políticas. Dejando atrás el modelo de sustitución de importaciones y el Estado intervencionista en la economía, con miras a hacer un Estado fuerte y eficiente.

Iniciando para este sexenio un nuevo modelo de desarrollo con características neoliberales: como la privatización y la apertura económica, junto a la política de tope salarial y la flexibilidad laboral. Algunos analistas coinciden que ante la necesidad de recuperar al sector privado por la crisis de confianza que se encontraba en el nivel más bajo, y por presiones de los acreedores internacionales, el gobierno de Miguel de la Madrid tomó la decisión de imponer un nuevo modelo de desarrollo económico de corte neoliberal.

Surge una nueva élite de políticos mexicanos que tomarían el control del Estado, cuyo primer presidente de este nuevo grupo de tecnócratas³⁰ sería Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). Tanto el sector empresarial como el gobierno, después de la nacionalización de la banca y de la reacción política del sector privado, concordaron en un nuevo eje de poder como la tecnocracia, como proyecto a fin de ambos actores. Con esta nueva élite en el poder se deja atrás un pasado lleno de proyectos económicos neopopulistas y de un Estado incapaz de resolver sobre todo los problemas económicos.

³⁰ Es aquel que tiene la capacidad técnica suficiente para impulsar programas racionales económico-productivos.

Así, desde la presidencia de Miguel de la Madrid, ya no es Estado llevaría a cabo los planes económicos sino el empresariado mexicano sería el encargado de impulsar los proyectos económicos del país. Especialmente con la profundización del programa de privatizaciones y la venta de los bancos al sector privado, programas de privatizaciones y con el regreso de los bancos al sector privado se dieron cambios importantes, no solo los antiguos empresarios sino también los nuevos salieron beneficiados con las privatizaciones de las empresas paraestatales.

“El gobierno delamadridista abandonó el modelo de sustitución de importaciones que abrió la economía al exterior, también atribuyó al mercado y al sector privado el papel de promotores del crecimiento, dejando al Estado la responsabilidad de orientación” (Loaeza, 1993:47).

A partir de este momento el papel del sector empresarial en la arena política se fortalecerá e irá en aumento conforme asciende también el nuevo proyecto de desarrollo neoliberal. “Si bien la decisión gubernamental de nacionalizar la banca tomó desprevenido al empresariado nacional, por lo que no presentaron una respuesta sólida e inmediata, también es cierto que a partir de ese momento los empresarios tomaron probadas formas de expresión política, inmediatamente las organizaciones empresariales y el Partido de Acción Nacional, e incursionaron en nuevas formas como son la participación en organizaciones propias de la sociedad civil y el Partido Revolucionario Institucional” (Montesinos, 1992: 110).

Es así como después de la nacionalización de la banca las organizaciones empresariales tienen más presencia en el escenario político. Los cambios en el papel del Estado alteraron intensamente las relaciones tradicionales entre este y el sector privado, la gran crisis económica que sufre México en 1982 afectó a todos los sectores sociales siendo el sector empresarial el más afectado, a pesar de ello señala Hernández que buena parte de las empresas lograron sortear con bastante éxito la situación. Manuel Somoza, director general de la casa de Bolsa Inverlat y presidente tanto de La Asociación Mexicana de Casas de Bolsa como de la misma Bolsa Mexicana de Valores, lo aduce el notable crecimiento que ha experimentado la bolsa.

Pero este fenómeno se da cuando una corporación adquiere un paquete de acciones de una empresa que está muy cotizada, y solo lo hace para posteriormente venderla a un

precio más elevado. En medio de la gran crisis de 1982 las empresas que se encuentran en La Bolsa de Valores reportan resultados positivos³¹.

Un gran problema que también tuvo el sector empresarial fue el abuso del poder por parte del gobierno, ante esta situación el presidente Miguel de la Madrid buscó un acercamiento con los empresarios por la vía de las modificaciones de las políticas adoptadas por José López Portillo. Incluso su discurso fue similar al de los empresarios, de hecho puso en marcha esos cambios en las políticas como las reformas constitucionales donde se aseguraba la participación de la iniciativa privada en el desarrollo económico del país y la devolución parcial³² de la banca a sus antiguos dueños.

Miguel de la Madrid inicia la privatización en 1983 y una parte de los empresarios ratifican su unión con la tecnocracia, pero otra fracción de empresarios radicales y que están en contra del Estado comienzan a enfilarse al neopanismo

Miguel De la Madrid se comprometió a la eficiencia administrativa, desburocratización de algunas empresas paraestatales, austeridad económica por parte del gobierno y a combatir la corrupción administrativa, que pese a “los intentos del sexenio anterior no se pudo combatir”.

Con estos cambios Miguel De la Madrid intentó establecer una buena comunicación con el empresariado mexicano y así construir una buena relación que beneficiara a ambos.

Señala Hernández que “los esfuerzos del gobierno de Miguel De la Madrid por controlar y eliminar la crisis, los dedicó en buena parte a reestructurar el viejo equilibrio económico que mantenía al Estado con el empresariado nacional; así como las relaciones políticas perdidas en los dos sexenios anteriores” (Hernández, 1988: 87). Para lograr una buena correspondencia entre ambos actores la administración de la Madrid aplicó una política económica donde se hacía la privatización de algunos ámbitos que en sexenios anteriores pertenecieron al Estado, y todo con el propósito que el sector privado continuara con la inversión productiva.

³¹ Solo algunas empresas y no todas corrieron con la misma suerte al no poder sortear de manera satisfactoria la crisis

³² Parcial porque cuando Miguel De la Madrid tomó el poder anuncia oficialmente la venta de 34% de la banca nacionalizada.

“La política económica del nuevo gobierno, bajo el signo de realismo económico y del cambio estructural de la economía³³, apareció como el medio de excelencia de la rearticulación de las relaciones entre el gobierno y los empresarios, al menos en lo que a sus sectores más prominentes y con mayor presencia pública se refería. Las declaraciones de los dirigentes empresariales de las principales organizaciones a lo largo de todo el sexenio revelaban que había un acuerdo básico sobre los principios generales de la política económica.

“Entre los lineamientos de esta política destacan una revisión sustancial de la intervención del Estado en la economía que incluyó la privatización de empresas estatales, programas de reconversión industrial³⁴ para algunas industrias bajo control estatal, una serie de recortes presupuestales que incidieron en la disminución de la burocracia y afectaron el gasto social, la reorientación de la producción bajo un nuevo modelo exportador y la reestructuración del sistema financiero privado a través de las casas de bolsa (Luna, 1992: 73).

Sin embargo las reformas constitucionales de diciembre de 1982, no dejaban del todo fuera al Estado pues a nivel constitucional seguía teniendo el mando así como también del sector social. Esta situación creó conflictos otra vez entre estos dos actores, que por su parte, los empresarios como efecto de la nacionalización de la banca demandaban más participación con garantías institucionales, pues ya no gastaba con solo a lo que llamaron “la buena voluntad de un hombre”. El sector privado ya no sólo se conformaba con los buenos acuerdos en materia económica, sino que también exigía modificaciones en el modelo de toma de decisiones e incluso en el propio régimen político.

Pues pese a nuevo modelo de desarrollo (neoliberal, como la privatización, adelgazamiento del estado, la liberación de la economía. El Estado era cuestionable por las organizaciones empresariales, el peso que el gobierno delamadridista asignó al sector empresarial en materia económica, también lo quisieron extender en el ámbito electoral. Así, empresarios se arrojaron a la política electoral y las organizaciones intervinieron más en el Partido Acción Nacional.

“El Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) y el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND) dado a conocer el 31 de mayo de 1983, que contenían los

³³ Proyecto político de transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales para adecuar al país a un esquema de economía de libre mercado propicio para el nuevo orden mundial globalizador

³⁴ Cambio tecnológico en la industria, solo las empresas que tenían gran capital se unieron a las empresas extranjeras.

principales ajustes pactados con el FMI en noviembre de 1982, fueron de esta manera ampliamente aprobados por los dirigentes empresariales y la política económica se fue convirtiendo en el símbolo de la recuperación de la confianza, quedando sujetos a negociación los aspectos más específicos, la instrumentación de sus principios y la definición del cuadro institucional que garantizara su ejecución. El realismo económico se constituyó así en el terreno compatible para las negociaciones entre el gobierno y los empresarios después de la ruptura de septiembre de 1982” (LUNA 1982: 75).

El sector privado viraba a ser tomado en cuenta a la hora de toma de decisiones y es en este sexenio cuando tiene logros muy significativos, y es en el marco de una profunda crisis cuando el empresariado sufre una transformación como actor político activo³⁵, es decir se convierte en una nueva fuerza política. Y junto con sectores gubernamentales coinciden en nuevas estrategias de desarrollo, orientados a las políticas de corte neoliberal cuestionando al régimen al intervenir en el terreno partidario y electoral.

“Por su protagonismo en el escenario político-nacional, se distinguen, la fracción tecnocrática y la fracción populista³⁶. Ambas comparten la preocupación por realizar cambios profundos en el régimen político administrativo y por ganar una posición mayormente privilegiada en su entramado institucional, las dos son marcadamente antiestatistas, en el sentido de que pugnan por el debilitamiento del poder del Estado y el predominio o una mayor liberalización de las fuerzas del mercado, y postulan que el interés privado debe regir las relaciones entre el Estado y la sociedad” (Luna, 1992: 82).

La nacionalización de la banca también incitó, como se mencionó antes, a que los empresarios buscaran otras salidas a sus expresiones y una de ellas fue que el sector empresarial radical del norte de país tomará sus actividades políticas en el PAN. “La participación de importantes empresarios nortefíos (Adalberto Rosas candidato a la gobernatura del estado de Sonora; del ex presidente del Centro Patronal del Norte, Francisco Barrio, candidato a la gobernatura del estado de Chihuahua; del ex vicepresidente de COPARMEX, Carlos Anaya, a la candidatura para gobernador de Sonora; del ex presidente de la CANAPO de Monterrey, Canales Clarión en el estado de Nuevo León, etc.) lo que inyecta nuevos bríos al PAN. La acción política del empresariado en el partido de derecha con presencia electoral real, determinó el

³⁵ Me refiero a actor político activo, cuando el empresariado nacional toma una acción perdurable en la arena política pública y así hacer que sus decisiones sean tomadas en cuenta.

³⁶ La fracción tecnocrática compuesta por: Asociación Mexicana de casas de Bolsa, CMHN y AMIS. La fracción populista: COPARMEX CNA y la CONCANACO.

fortalecimiento del neopopanismo que caracterizó al escenario político a mediados de los años ochenta” (Montesinos, 1992: 111).

“La evidente participación del sector empresarial dentro del PRI y del PAN, advierte que la clase económicamente dominante se compone de fracciones, lo cual refleja y explica el porque de su participación apoyando al Estado mexicano (como es el caso de los empresarios más poderosos del país) y la participación histórica de los empresarios En el Partido Acción Nacional. Por ejemplo, como lo demuestra el liderazgo de Clouthier quien sin pertenecer a la selecta élite económica agrupada en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), simboliza la convergencia de intereses entre diferentes facciones de la clase capitalista grandes y medianos empresarios”(Montesinos y Martínez, 2001: 86).

“El país pasó a una economía abierta, de un modelo con predominio del Estado a otro en el que los grupos privados marcan las pautas del desarrollo, de una economía acostumbrados a los mercado cautivos a otra en la que se tienen que conservar y ampliar los mercados sobre la base de la productividad, calidad y costos para poder competir tanto en los locales como en los foráneos” (Loyola 1996: 19).

De hecho en este período se vio a un sector privado más participativo y más dinámico. “En la década de 1980, el presidente De la Madrid trabajó asiduamente para reparar la relación dañada y en parte lo logró, sin embargo, grupos empresariales, bajo el liderazgo de la COPARMEX, reclamaba un activismo político más enérgico de los empresarios incluyendo el apoyo abierto a partidos de oposición. Esos grupos empezaron hacer campaña a favor de candidatos del PAN, y miembros de ellos incluso fueron candidatos a cargos locales y municipales, especialmente en el norte del país. Un símbolo de su posición fue la presencia de un exitoso empresario norteco, ex presidente de la COPARMEX como del CCE, como adversario de Salinas en la campaña presidencial de 1988, por el PAN” (Ai Camp, 1990: 160).

La demanda de participar en mayor grado fue como una impugnación a el presidencialismo y al sistema político, bajo dos modalidades: crear un contrapeso de poder y canales participativos dentro de aquel.

El principal propósito de las reformas impulsadas en México fue el de desarrollar una amplia base competitiva del sector exportador de bienes no tradicionales. México ingresa al GATT en 1986 y se convierte en un exportador de manufacturas. El adelgazamiento del Estado, la privatización de las empresas propiedad del Estado y la

desregulación económica fueron las estrategias adoptadas por el diseño del estado mexicano.

México todavía no salía de la crisis económica de 1982 cuando en 1987 se da una fuerte inflación produciendo una mayor crisis y poniendo en duda el nuevo proyecto político neoliberal. La inflación alcanzó el 160% y una caída en la bolsa acabó con los ahorradores. Otros procesos políticos que se dan al margen del gobierno es la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz, del PRI formando la corriente democrática para posteriormente formar un nuevo partido el Frente Democrático Nacional (FDN).

A partir de la implementación de las reformas al Estado mexicano este empieza a perder sus capacidades en la toma de decisiones. Estas reformas a las estructuras del Estado mexicano dieron sentido a su transición y cambio de un modelo de Estado benefactor a un modelo de Estado neoliberal y a una transición.

**EL AUGE DEL PROYECTO NEOLIBERAL EN LOS ALBORES DE LA
GLOBALIZACIÓN
CARLOS SALINAS DE GORTARI (1988-1994)**

El 6 de julio de 1998 Salinas alcanza el poder en medio de una crisis de legitimidad, creada por la caída del sistema que controlaba el conteo de los votos de la contienda electora, dándose a conocer irregularidades en el proceso.

Manuel J. Clouthier acepta su derrota, pero sin dejar pasar la oportunidad de manifestar sus dudas sobre la limpieza de las elecciones y el PAN inició una política de concertación que legitimaba a Salinas y permitía las reformas constitucionales. Cárdenas en cambio demostró su descuerdo iniciando una campaña de deslegitimación del régimen, ya que se consideraba ganador de las selecciones.

Con la llegada de Salinas al poder, las políticas económicas del periodo anterior continuaron vigentes y además se profundizaron y fueron incorporadas en la nueva era de la modernización del país.

Al igual que sexenio anterior "... Salinas se empeñó en construir y mantener un nuevo orden, llamado liberal social³⁷, que desplazara al orden nacionalista revolucionario anterior y que impusiera el deseado orden económico sin abandonar, en lo fundamental, las tradicionales y autoritarias formas de ejercer la dominación política" (Alfie y Méndez, 1998:66).

"El presidente Salinas, rebautizaba la ideología del partido cambiaba de un plumazo el contenido ideológico del Estado nacionalista revolucionario y proponía un nuevo proyecto de nación el liberalismo social. Ante esta ambigüedad que permitió desde mucho antes del bautizo aplicar un modelo económico modernizador en un esquema político tradicional, no es difícil suponer que Estado liberal social en México resulta sinónimo de Estado liberal autoritario, el reto estriba en determinar por cuanto tiempo las contradicciones internas y las presiones internacionales permitirían mantener este modelo ..." (Bolívar, Méndez y Romero, 1992:11).

"Con un PRI sacudido por una fuerte división en sus filas; un FDN que fue creciendo como una bola de nieve en las manifestaciones de la campaña electoral de Cárdenas y un PAN postulando a un agresivo representante empresarial, pero que gozaba de gran popularidad en gran parte de las clases medias y algunas regiones como el norte del

³⁷ Señala Alfie que desde el sexenio anterior se empieza a construir este proyecto llamado liberal social, pero es hasta marzo de 1992 cuando el presidente Salinas lo bautice formalmente.

el norte del país, Manuel J. Clouthier. De esa Manera se llegó a las elecciones de 1998” (Cárdenas y Guerra, 1996:173).

A pesar de la inflación que en 1982 alcanzó el nivel más alto 160%, Salinas de Gortari empezó con números positivos su mandato. Para 1989 lo logró renegociar a deuda externa, “Miguel de la Madrid recibió al país con un endeudamiento de 74 mil 900 millones de dólares un déficit en cuenta corriente de casi 11 mil millones de dólares; un desplome del tipo de cambio, y tasas de inflación que alcanzaron el 100%. A todo esto se habría de agregar un fuga de capitales calculada en 22 mil millones de dólares” (Campuzano, 1994:118).

Para rescatar al país de una moratoria, los organismos financieros internacionales, los países acreedores y la banca privada internacional acordaron renegociar la deuda. Pero, para ello le solicitaron al gobierno mexicano un ajuste en la economía, es decir, apertura comercial y limitar el papel del Estado en la economía.

Se recupero la confianza del sector privado, y la reprivatización de la banca en 1990 termino por afianzar los lazos entre empresarios y gobierno. Si la inflación en 1982 se disparo al 160%, para 1991 tuvo una grandísima reducción del 10% y los 22 mil millones de dólares por concepto de fuga de capitales en 1982 regresaron al país junto con nuevas inversiones.

“Políticamente, el gobierno de Salinas trató de lograr la legitimidad que no alcanzó en las urnas mediante golpes espectaculares: la aprehensión del corrupto líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia, la destitución de Carlos Jonguitud Barrios, el líder del magisterio, y el arresto de uno de los poderosos hermanos empresarios Legorreta, coartífice de un fraude bursátil en 1987. Tampoco titubeo para encarcelar a José Antonio Zorrilla, presunto asesino intelectual del periodista Manuel Buendía todo ello fue bien recibido por la ciudadanía” (Cárdenas y Guerra, 1996:174).

. Desde las elecciones del 6 de julio de 1988 la legitimación fue un problema para el presidente Salinas, que como estrategia de legitimación incluyo el ataque a la pobreza a través del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) como principal instrumento gubernamental para responder a las necesidades de la mayoría de la ciudadanía, anunciado por el presidente en el cambio de poder el 1 de diciembre de 1988.

“La columna vertebral de política social de este administración es (PRONASOL). El objetivo de Solidaridad es emprender una lucha frontal contra la pobreza extrema, mediante la suma de esfuerzos coordinados en los tres niveles de gobierno y los concertados con los grupos sociales. Aún cuando en sexenios anteriores se realizaron

programas sociales de combate a la pobreza, Solidaridad se distingue de los otros al constituirse como el instrumento material del liberalismo social, pues más que un programa asistencial, es un proyecto para reideologizar y replantear las funciones de Estado y su relación con la sociedad. Así el bienestar social se vuelve corresponsabilidad del gobierno y la sociedad” (Campuzano, 1994:115).

El 25 de mayo de 1992 se creó La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con el propósito de juntar las distintas acciones gubernamentales en materia de bienestar social, y así funcionar otras secretarías en una sola. PRONASOL pasó a formar parte de la SEDESOL, pues así pudo convertirse en algo más que solo un programa de sexenio.

“Enmarcado en la deslegitimación política y electoral del grupo gobernante encabezado por Salinas de Gortari, y teniendo como sujeto primordial de las transformaciones propuestas al sector dueño del gran capital privado, el proyecto modernizador planteó el requerimiento de resolver antes que nada la relación política entre gobernantes y los representantes de los grandes empresarios del país” (Concheiro, 1996:39).

“La reprivatización bancaria incluyó también el otorgamiento de facilidades para abrir nuevos bancos nacionales y extranjeros. Esta estrategia acompañada de un proceso de desregulación económica, destinado a facilitar trámites y favorecer la inversión nacional e internacional” (Campuzano, 1994:120).

A mediados de los años setenta el sector privado mexicano había aceptado muy a su pesar las reglas impuestas por el sistema político presidencialista y de partido de Estado. Sin embargo es a partir de las crisis económicas cuando el sector empresarial y la burocracia estatal sufren cambios negativos en sus relaciones políticas, y es en ese momento cuando el empresariado comienza a tener aspiraciones en el ámbito político por lo que decide ampliar su papel en la toma de decisiones dentro del gobierno.

“Después de las elecciones, el cambio en el discurso empresarial fue inmediato. Muchas fueron las expresiones de apoyo al nuevo presidente, basadas en la afirmación de que es sector privado era, ahora sí, tomado en cuenta e incorporado a la toma de decisiones. Con insistencia se señaló que la actitud del gobierno hacia el empresariado había cambiado y que la anunciada recuperación económica se apoyaría principalmente en la actividad privada. Las coincidencias del gobierno de Salinas con las posturas de los empresarios fueron subrayados, recalcando el papel protagónico del sector privado” (Concheiro, 1996:47).

Las organizaciones empresariales cúpula sostuvieron su demanda de un sistema electoral verdaderamente confiable y, por lo tanto, la erradicación del fraude electoral a lo que Salinas respondió “que la garantía más apremiante en el ámbito político es la transparencia de los procesos electorales y en su discurso de toma de posesión estableció el Acuerdo Nacional para la ampliación de la vida democrática. Sus objetivos principales el perfeccionamiento de los procedimientos electorales, la actualización del sistema de partidos y la modernización política. Este acuerdo permitió que México entrara en una nueva etapa de democracia que inicio mediante las reformas electorales “(Montaudon, 1994:124).

En México se realizan elecciones todos los años, las federales tienen lugar de 3 y 6 años y las locales anualmente, según las modalidades y los tiempos fijados por las legislaciones electorales de los estados.

En 1990 se creó el Instituto Electoral (IFE, el responsable de la organización de las elecciones y la implantación Servicio Profesional Electoral. También con la autoridad para organizar administrar y validar los procedimientos electorales.

“Una de sus características principales es la imparcialidad, además de estar integrado por diversos partidos políticos. Para el gobierno de Salinas lo más importante en el ámbito político fue la transparencia de los procesos electorales” (Montaudon 1994:125).

Pero, lo más importante que aconteció en la historia electoral de México ocurrió en 1993 cuando de acuerdo a las audiencias se hicieron reformas Constitucionales y al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales en cuatro puntos: 1) Derechos políticos y sistemas de representación; 2) Régimen de partidos políticos; 3) Condiciones de la competencia electoral y 4) Calificación y tribunal electoral.

Es así que para evitar fraudes electorales, en el Nuevo Código Electoral, se visualizaron sanciones, es por ello que una nueva medida para evitar estas situaciones fraudulentas, es la credencial para votar con fotografía.

“A partir de ello gobernantes y dueños del capital conformaron un acuerdo implícito consistente en realizar las transformaciones económicas y sociales en el marco del tradicional régimen político sustentado en el presidencialismo corporativista que ha impedido la democratización del Estado” (Concheiro, 1996:49).

Señala Concheiro, que en la toma de posesión como presidente del CCE en 1991 Nicolás Madáhuar pronunció en su discurso que se estaba logrando un diálogo para alcanzar la concertación y la unidad y que las cosas ya habían cambiado para el sector privado nacional y que a partir de ese momento el empresariado se convertiría en gestor.

Destacados dirigentes del sector empresarial se unieron a diferentes acciones de poder, a comités, asesores, comisiones negociadoras, etc. y de hecho crearon agrupaciones para promover más su participación en el gobierno.

Por la gran cantidad de agrupamientos empresariales existentes se tuvo la necesidad de crear otra organización y se creó la Coordinadora de Organismos Empresariales para el Comercio Exterior (COECE), organismo encargado de representar los intereses del sector privado ante las negociaciones del Tratado del Libre Comercio (TLC).

“El 12 de junio de 1991, las negociaciones del TLC, se iniciaron formalmente en Toronto Canadá, el 14 de diciembre los presidentes Bush y Salinas se reunieron, en donde ratificaron la importancia del TLC y la necesidad de un acuerdo amplio, que integrara a todos los sectores. Fue hasta el 11 de agosto que concluyeron finalmente las pláticas del TLC. El 17 de diciembre de 1992 se llevó acabo la firma del TLC. Se acordó que entrara en vigor a partir del 1 de enero de 1994, como lo aprobaron los respectivos cuerpos legislativos” (Botello, 1999:128).

Las reglas impuestas por el mercado mundial en proceso de globalización condujo a la apertura política y por consiguiente el Tratado de Libre Comercio. El Tratado representa una contribución al comercio libre, a las inversiones y al flujo de tecnologías así como integrar a México a un plano de primer mundo.

“La necesidad de competir internacionalmente declararon los empresarios, impone cambios estructurales que dan como resultado la necesidad ineludible de la modernización integral del país en lo económico, social, educativo y político” (Concheiro, 1996:65).

Y es precisamente “ la modernización de la política educativa elemento central del proyecto de desarrollo impulsado por Salinas, planteó en su sexenio la necesidad de reformar el artículo 3º constitucional, para elevar a rango de ley la educación básica de nueve años, primaria y secundaria; y estipular la obligación que el Estado tiene de impartir educación preescolar. A demás se reformó el artículo 31 constitucional, y así se consagró el derecho y la obligación de los padres de familia a involucrarse en el proceso educativo. También se emprendió un programa de descentralización educativa, en el que el Gobierno Federal transfirió a los estados el manejo de trabajadores, inmuebles, equipos y recursos; se incrementó el gasto nacional educativo casi en una décima parte y se promulgó una Ley General de Educación, con nuevos ordenamientos sobre equidad, financiamiento, participación social, concurrencia educativa y sanciones”

(Villamil,1994:92). Queda asentado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el 18 de mayo de 1992.

En la cuestión laboral el sector empresarial es más enérgico y se exigen cambios a fondo en la calidad, productividad y competitividad tanto en las empresas como en los trabajadores y que el gobierno sea menos regulador y más facilitador de las relaciones laborales.

“Salinas de Gortari propuso en el Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994), las siguientes líneas de acción: 1. Aumentar el empleo y los salarios reales; 2. Mejorar y ampliar la educación, y al mismo tiempo fortalecer, la capacitación y la productividad para promover el aumento de las remuneraciones reales; 3. Lograr una política tributaria que propicie una mejor distribución del ingreso; 4. Impulsar una política de subsidios más selectiva y transportes; 5. Asegurar la vigencia de una política laboral que satisfaga los derechos de los trabajadores y 6. Apoyar una participación amplia y decidida del movimiento obrero” (Concheiro, 1996:72).

El fin de sexenio 1994, fue un año muy tenso, primero por el levantamiento en Chiapas el 1 de enero y segundo por el asesinato de Luis Donaldo Colosio candidato a la presidencia de México por el PRI, el 23 de marzo.

Las primeras horas de enero de 1994, sumieron al país en un gran desconcierto y asombro. El autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), apoderándose de varios municipios del estado de Chiapas. Dentro de las primeras determinaciones del presidente Salinas fue la de enviar a Manuel Camacho Solís como el comisionado para la Paz y Reconciliación en Chiapas, para atender las situaciones que pudieran afectar las garantías individuales de los civiles.

“La presencia del Ejército Zapatista fue devastador para un proyecto de nación que había demostrado el poder de la nueva clase política, la tecnocracia, al desplazar tan pocos recursos para las clases subalternas y posibilitar un nuevo proceso de concentración de la riqueza. Se trata de reconocer que la presencia guerrillera en el sur de la nación es una parte de la causalidad de la crisis que se vive aunque es obligado reconocer su carácter decantador, es decir si ya se había incursionado en el club de los países ricos (en 1993 México fue aceptado como miembro de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico), el caso de Chiapas obligó a reconocer la miseria y desigualdades sociales que proyectaron a la nación, todavía muy alejada de la modernidad” (Montesinos, 1995:4).

Después del asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, ocurrido el 23 de marzo se desató una ola de violencia, los secuestros que se desataron en contra de prominentes empresarios como el de Alfredo Harp Helu.

“Lo importante de la desacreditación del proyecto neoliberal es la deslegitimación del proyecto que impulsó la tecnocracia y las élites empresariales desde 1982” (Montesinos, 1995:5).

Se trata entonces de advertir un nuevo cambio del escenario político, pues tanto el gobierno como las organizaciones empresariales cúpulas cambiaron sus estrategias para asegurar sus intereses. En el caso específico de los empresarios llamó la atención que ante el conflicto chiapaneco ese sector protagónico de la transición se quedara sin discurso.

“El debilitamiento del Estado fue visto por muchos como el inicio de una transición que conduciría al país del fin del autoritarismo a un régimen democrático. No obstante, el fin del mandato presidencial de Carlos Salinas (1988-1994) el reacomodo político ofrece un panorama diferente al que describían quienes pensaban que los días del autoritarismo estaban contados. Es cierto, que el sistema político mexicano es mucho más abierto que en los años setenta, pero también es cierto que todavía está muy lejos de ser democrático” (Loaeza, 1993: 47).

De hecho se pensó que sólo en la administración de Salinas había el interés por reestructurar la relación corporativista, y esto por las promesas del presidente sobre una modernización política y democrática.

“Los esfuerzos del salinismo se centraron en una reforma electoral descuidando o dejando de lado las reformas necesarias para una verdadera transición a la democracia o para una reforma política de corte democrático” (Loyola, 1996: 28).

Carlos Salinas logró una conjunción de las propuestas empresariales con los propósitos de su gobierno. Los ejes principales de ese encuentro fueron, a partir de la llamada Reforma del Estado, una amplia política privatizadora, que abarcó a las empresas paraestatales, la banca comercial y la tierra ejidal y comunal; el inicio de las profundas modificaciones en las relaciones laborales, y la amplia apertura comercial y la firma del TLC” (Concheiro, 1996: 70).

En todas las reformas modificadas por el presidente Salinas contó con la participación del sector privado.

“Así el dramático año de 1994 terminó con la posibilidad de consolidación del orden Liberal Social. La crítica situación política del país exhibía un enorme vacío sólo

cubierto por la violencia. A partir de este momento, los procesos económicos, políticos y sociales mantienen un rumbo incierto. El viejo régimen nacionalista revolucionario se niega a morir, el régimen liberal Social dejó de ser opción pero sigue teniendo presencia política, y la promesa zedillista de un nuevo régimen neoliberal en lo económico y en lo político, no puede establecerse. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer” (Alfie y Méndez, 1998:70).

EL DECLIVE DEL PROYECTO LIBERAL SOCIAL EN EL NUEVO ORDEN ESTATAL

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN (1994-2000)

A pesar de que Carlos Salinas inició su mandato bajo la sombra de las dudas sobre la legalidad de su elección, a unos cuantos meses de ejercer su mandato el pueblo mexicano le devolvió la confianza. Si Salinas no ganó la presidencia en las urnas el 6 de julio de 1988, ciertamente la conquistó desde los pinos en su primer año de gobierno. A los pocos meses de ejercer el poder había alcanzado ya cifras de popularidad alrededor del 60%, las cuales mantuvo durante su mandato.

Zedillo en cambio, llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1994 tras una elección limpia, además de ser la más cuidada y vigilada, en la historia del país. Al contrario de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo obtuvo la legitimidad en las urnas y ésta se evaporó rápidamente como consecuencia del desplome económico.

Con el levantamiento guerrillero (EZLN) a cuestas, a principios de 1994, Ernesto Zedillo en febrero de 1995 sorprendió al ordenar una nueva ofensiva contra el EZLN. Las autoridades dieron a conocer información sobre la identidad del subcomandante marcos, como un activista político llamado Rafael Sebastián Guillén Vicente, y afirmaron que la organización guerrillera preparaba nuevos ataques.

“Las contradicciones al interior del poder terminaron por destruir el Liberalismo Social y crear un enorme vacío, que sólo lo cubrió la violencia y la permanente amenaza de la ingobernabilidad” (Alfie y Méndez, 1998:88).

“Al llegar Ernesto Zedillo a la presidencia de la República, el clima político se tornó cada vez más amenazante e incierto para el gobierno, para la paz social y para la soberanía nacional. La herencia del salinismo se había convertido en un enorme fardo de problemas no resueltos: una clase política dividida y enfrentada, un movimiento guerrillero con señalada influencia nacional, un estado de la República, Chiapas, al borde de la guerra civil, violentos conflictos poselectorales y una súbita devaluación del peso que en pocas semanas desestabilizó económicamente al país” (Alfie y Méndez, 1995:65).

“Cifra preliminares que la economía tuvo en 1995. Una contracción del 7%, el consumo cayó mucho más que el ingreso. Las cifras indicaron un desplome del 14% en el consumo, en tanto que el ingreso descendió en alrededor de 8%. Dos razones

coincidieron para este desequilibrio. Una de ellas fue el temor de los consumidores, producto de la misma profundidad de la crisis, a realizar adquisiciones importantes. Muchos mexicanos postergaron compras de bienes duraderos por el miedo de perder el empleo o de verse imposibilitados más tarde de pagar sus adquisiciones” (Sarmiento, 1996:35).

“Con el derrumbe del modelo económico salinista sobrevinieron más sacrificios sobre los desposeídos. Se había confiado en que una inversión especulativa compensara una balanza comercial con un gran déficit a causa de una apertura indiscriminada de la economía. El crecimiento del peso de las transnacionales modificó el equilibrio de la dominación. La deuda externa creció, las carteras vencidas se agravaron aún más, los índices prometidos de crecimiento se esfumaron, las metas de una inflación reducida a un dígito se acabaron” (Alonso, 1996:49).

“uno de los principales retos políticos de Ernesto Zedillo al iniciar su sexenio, 1994-2000), independientemente del error de diciembre de 1994 (una crisis financiera derivada de un extraordinario desequilibrio comercial, a su vez provocado por la sobrevaluación del peso en relación al dólar, ya que se mantenía artificialmente la paridad cambiaria como un ancla contra la inflación. La crisis del peso provocó que el nuevo gobierno iniciara el sexenio decidiendo una significativa devaluación), era a diferencia de su predecesor, Carlos Salinas, la de legitimar un proceso político a partir del cual arribó al poder. Se trata de su inesperada nominación como candidato del Partido oficial después del asesinato de Colosio, y toda la violencia desatada ese año. A pesar de cumplir legalmente con un proceso electoral, no le reditúa el liderazgo que un presidente de la República requiere para conducir a la nación bajo la égida de un proyecto económico que ha favorecido la concentración de la riqueza y aumentado la proporción de la población sometida a condiciones de marginación económica y social” (Montesinos, 2007:300).

“... otro de los principales retos del gobierno zedillista era negociar en un marco político que ya evidenciaba su tendencia al pluripartidismo, la creciente presencia de la oposición real tanto del PRD y PAN, así como los efectos perniciosos de la crisis económica sobre importantes segmentos de la sociedad mexicana, sobre todo aquella afectada directamente” (Montesinos: 2007:300).

Simplemente durante 1995 se registraron varias elecciones importantes que marcaron un cambio significativo en el ambiente político del país. El PAN registró avances notables, en tanto que el PRI y el PRD tuvieron problemas durante el año. De

las 5 elecciones para elegir gobernadores estatales, el PAN ganó 3, en Jalisco, Guanajuato y Baja California. El PRI dos, Yucatán y Michoacán. Y el PRD tuvo oportunidad de ganar Michoacán pero perdió terreno debido a una disputa interna.

Además de sus tres triunfos electorales para gobernaturas estatales, el PAN obtuvo triunfos en presidencias municipales.

El empresariado mexicano comenzó a manifestarse y advirtió que la gran crisis por la que estaba pasando el país ponía en riesgo su proyecto. Aprovechando la coyuntura política propuso que gobernara la oposición. Con el segundo triunfo del PAN en Baja California la COPARMEX reiteraba que ya existían las condiciones necesarias para que la oposición gobernara.

Señala Montesinos que el sector empresarial hacía una crítica a todos los gobiernos priistas pero no al modelo neoliberal, proyecto de la tecnocracia del partido oficial.

“El 8 de marzo de 1995 fuentes del sector empresarial dio a conocer, después de una reunión en la residencia oficial de los pinos, que el gobierno insistía en la necesidad de aumentar los impuestos y el precio del combustible. Esta posición tuvo una respuesta negativa por parte de los empresarios de Nuevo León, Jalisco, Puebla, Tamaulipas y Oaxaca que amenazaron con declarar suspensión de pagos a la banca y a la Secretaría de Hacienda” (Sarmiento, 1996:49).

No tardaron en protestar todos los empresarios y ejercieron presión al gobierno de Zedillo para que se garantizaran sus intereses. Sin embargo el 10 de marzo de 1995, el presidente Zedillo hizo un reclamo al sector empresarial, el que abiertamente no se sumó al plan gubernamental para enfrentar la crisis económica y que no había otra alternativa.

Los bancos dispararon las tasas de interés propiciando una crisis impresionante de la cartera vencida. Todo el que había pedido prestado para comprar una casa, un automóvil, o tenía una tarjeta de crédito en uso, así como aquellos que habían financiado sus negocios industriales o agropecuarios, se encontraron de la noche a la mañana con que su adeudo se había multiplicado. El gobierno en lugar de apoyar a los deudores, optó por subsidiar a los bancos comprando la cartera vencida con bonos que pagaban intereses muy altos, pero además permitió que los bancos trataran de cobrar las deudas. Así los bancos, aunque el gobierno ya les había pagado asediaban a los deudores.

A raíz de esta situación la gente se organizó en una asociación de deudores conocida como el Barzón. El Barzón se activó más por la crisis financiera y en particular por el

caso de las carteras vencidas. En una visita del Presidente a Guadalajara, el Barzón organizó una enorme protesta en contra del Secretario de Gobernación pidiendo su renuncia por la detención de uno de los líderes de este movimiento.

Actualmente el Barzón cobija a productores agrícolas, medianos y pequeños empresarios o a tarjeta-habientes, todos endeudados con la banca y por tanto afectados por la devaluación de la tasa de interés.

“Con la anuencia del PAN, el gobierno asumió la deuda de los bancos a través del FOBAPROA que después se convirtió en el IPAB agregando alrededor de 65 mil millones de pesos a la abultada deuda de México, causando toda clase de protestas entre los partidos de oposición y el pueblo. En marcada preferencia por los empresarios, Zedillo también salió al rescate de las empresas que habían invertido en la infraestructura carretera, que alegaban que la compra de las concesiones no les había convenido. También rescató a los empresarios que habían adquirido los ingenios.

“Cada elección tiene una historia que debe ser contada y recordada. La elección de 1997 tiene una importante historia que contar acerca del avance de la democracia en México, de las reformas que han tenido lugar y que han hecho más transparente que nunca los procesos electorales. Por primera vez en la historia reciente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal fue electo y no designado. Por primera vez el PRI no tiene la mayoría en la cámara de diputados” (Campos y Cervantes, 1997:5).

“Las elecciones de 1997 marcaron un hito en la historia de la transición democrática en México. Más allá de los resultados registrados y de sus posibles significaciones, los comicios llevados acabo en julio de ese año demostraron que el país cuenta ya con un marco normativo e institucional capaz de garantizar a plenitud las decisiones ciudadanas expresadas mediante el voto. No es esta una conquista menor si consideramos la tradición de desconfianza y sospecha que durante mucho tiempo acompañó a las elecciones mexicanas. Por el respeto a la legalidad, la transparencia de los resultados y la madurez cívica, las elecciones de 1997 tienen el valor de un símbolo: que marca el comienzo de una nueva época hacia la normalidad democrática” (Salazar, 1999:11).

“A pesar que para 1998 todavía quedaban vestigios de la relación de los empresarios y grupos gobernantes y su partido, los voceros empresariales insistieron más bien en su compromiso con las reglas democráticas del juego político, al menos en tanto estas no atenten contra la seguridad de sus negocios. Dispuestos a usar su capacidad de presión ante todo mediante el retiro de sus capitales, conocedores de su nuevo papel y su nuevo poder en la economía abierta y competitiva” (Salazar, 1999:34).

En sus discursos el sector empresarial dejaba atrás al viejo sistema y apuntaba hacia un cambio gradual y concertado.

“El sexenio de Zedillo representó un periodo en que la crisis económica se expresó desde el inicio de esa gestión, con la crisis del peso a finales de 1994, que provocó una devaluación. A pesar del auge de las exportaciones, en 1995 se observa una reducción de 6.2% en el PIB, al tiempo que disminuyen los salarios y el empleo. Para 1998, los salarios continuaban siendo 20% menores que los de 1994. la deuda pública externa se mantenía estable, 86 mil millones de dólares, aproximadamente, mientras la deuda privada pasaba de de 26 mil millones de dólares, en 1996 más de 50 mil millones de dólares para 1999. Y el déficit de la balanza comercial se explica por el dinámico crecimiento de las importaciones, provenientes fundamentalmente, de las empresas extranjeras” (Montesinos, 2007:307).

El Presidente Zedillo deja un país con grandes diferencias en la distribución del ingreso, una alta concentración en una minoría y una mayoría en la pobreza.

La crisis del partido hegemónico y por consiguiente el fortalecimiento de la oposición, contribuyó a que un partido opositor obtuviera la presidencia. Los logros obtenidos tanto en las elecciones para gobernadores como para presidente municipales, fueron el inicio de un gran paso de la oposición para llegar al poder. Sin olvidar las elecciones de 1997 que fue el parteaguas hacia la democracia.

Ahora toca al PAN decidir la inclinación de la balanza, por un lado generar un proyecto de nación que sea incluyente a todas las clases sociales, y que la transición que por tanto tiempo se esperó sea una transición verdaderamente democrática, o seguir por el mismo sendero de los gobiernos posrevolucionarios.

CONCLUSIÓN

Habiendo llegado al final de este trabajo, se puede analizar, que a lo largo de los periodos en cuestión, los proyectos de nación realizados en cada sexenio, no han sido los adecuados para el país. El marcado régimen autoritario y un sistema político basado en la hegemonía de un partido de Estado, impuesto desde los gobiernos posrevolucionarios, prevaleciente desde 1929 y que fundamentalmente la actividad estatal fue una característica enfática que provocó que la transición tardara demasiado tiempo en hacerse presente, y además que no fue una transición inmediata sino gradual.

Es en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) el papel rector del Estado mexicano, fortaleció su papel en el ámbito económico ya que el desarrollo económico no podía ser dejado en manos del sector privado, pues el Estado debía ser el mayor impulsor, para equilibrar los intereses de la comunidad.

Echeverría asumiría la dirección del Estado y con ello los empresarios confiaban en un mejor panorama en sus relaciones con el Estado. Sin embargo, el comportamiento del ejecutivo llevó por diferente camino esta relación. Los empresarios dispuestos a cooperar con el sistema político para obtener así un mejor modelo de desarrollo benéfico para ambos, se desvaneció, cuando las políticas económicas implantadas por el gobierno no convenían al sector privado.

Con las prácticas populistas y un Estado intervencionista sobre todo en la economía, tuvieron lugar numerosos enfrentamientos entre el Estado y el sector privado entre 1970 y 1976. Las modificaciones prometidas en el modelo de desarrollo por el presidente y por altos funcionarios de su gobierno nunca cambiaron, poniendo al sector privado en un estado de descontento por las políticas económicas implantadas, ya que las calificaban de ineficaces y que atentaban contra sus intereses.

Para finales del sexenio echeverrista los empresarios cambiaron su actitud, de ser sólo un grupo de presión pasaron a incrementar su participación en el sistema político mexicano. Ejemplo de ello se puede observar en la creación del Consejo Coordinador empresarial, que formuló una serie de principios de los problemas que se estaban viviendo.

Con la sucesión presidencial (1976-1982) y con la llegada al poder de José López Portillo se calmaron por el momento las aguas en la relación Estado-empresarios. El primer objetivo del presidente, fue asegurar en 1977 la estabilidad económica del país

ante el sector privado Con Portillo se terminó el modelo de desarrollo compartido y llegó a su fin el populismo que tanto se atacó en el sexenio de Echeverría. Proponiendo un nuevo plan para enfrentar la crisis que había dejado el periodo anterior, Alianza para la Producción sería el nuevo proyecto que los empresarios aceptarían, pues tendrían un papel destacado en la recuperación de la economía. Alianza para la Producción, Reforma Política, y Reforma administrativa, así como el boom petrolero fueron las medidas para calmar las protestas y tensiones políticas, sin embargo solamente postergaron el clima de tensiones que había detrás.

Se encuentran en el sureste mexicano ricos yacimientos petroleros, que para López Portillo fue la solución a los problemas económicos y sociales. Pero no contempló que habría una crisis mundial de petróleo quedando sólo la ilusión de los jugosos excedentes que se vivieron al principio del sexenio.

Este gran proyecto que produciría un crecimiento económico y que para el Estado representaría seguir con el poder central, se vino abajo con la realidad de los cambios mundiales no previsto por el gobierno.

Ante la crisis económica, el presidente decide nacionalizar la banca mexicana en septiembre de 1982 ante el desconcierto del sector privado, llegando así a su punto más bajo la relación entre estos dos actores políticos. Con la creación del CCE y la situación de crisis de confianza por parte del sector privado hacia el gobierno, se dio el arribo de los empresarios a la política pública.

A partir de 1982 comienza una verdadera transformación para el país, la transición tan esperada por fin había llegado. Durante 1977 ya se veían indicios de procesos liberalizadores y que generaría una crisis de régimen. El régimen deja el proyecto revolucionario para dar paso al modelo neoliberal, donde se genera una ruptura desde la cúpula del poder, entre los duros y los blandos, siendo estos últimos los que impulsarían el cambio del régimen.

Para los tres sexenios siguientes (1982-2000) llegan al poder una nueva élite, los llamados tecnócratas, con un proyecto innovador para el país, el neoliberalismo. Pues lo exigía la economía mundial que se estaba viviendo. Dejando atrás las viejas estructuras políticas del estado posrevolucionario.

Con el gobierno de Miguel De la Madrid (1982-1988) se abandonaron las políticas neopopulistas generadas en periodos pasados y vino una reestructuración del Estado. Generando reformas constitucionales a favor de la iniciativa privada en el desarrollo económico y con la devolución parcial de la banca, los empresarios volvieron a entablar

una relación con el gobierno. Sin embargo a raíz de la nacionalización de banca el sector empresarial no se conformó con sólo intervenir en el sector económico sino también deseaba hacerlo en el plano político público, pues ya no confiaba del todo en las decisiones del gobierno y tener más presencia en el desarrollo dentro de la política serviría de contrapeso al régimen.

La apertura política y la nacionalización de la banca sirvieron para que el sector empresarial se insertara en el ámbito político público, es decir, ingresar en las filas de algún partido político, y de esta manera tener más posibilidades de que sus demandas se cumplieran.

El hecho de que el empresariado mexicano se insertara en la política pública, fue por su desconfianza en la toma de decisiones del gobierno y por las crisis generadas a lo largo de los sexenios aquí estudiados. Todavía el país no salía de la crisis de 1982, cuando en 1987 se viene otra crisis económica como política, generada por la alta inflación y déficit gubernamental, y la salida del partido hegemónico de la corriente democratizadora, poniendo en entre dicho la eficacia del proyecto neoliberal.

El proyecto neoliberal se acentuó más con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari, y con ello una gran tranquilidad para el sector privado, pues las propuestas del ejecutivo concordaban con la de ese sector, y de hecho en esta administración se convirtieron en actores privilegiados del modelo de desarrollo económico. El achicamiento del Estado mexicano, las privatizaciones de las empresas paraestatales y la apertura económica y comercial, que terminó en el acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.

Con su proyecto de liberalismo social, que indicaba una mejor economía y una mayor justicia social, el sector privado sería el encargado de llevar las riendas del desarrollo económico del país. Con este nuevo modelo de desarrollo surgieron nuevos ricos empresarios como el grupo Carso que adquirió Teléfonos de México y otros empresarios que de la nada surgieron comprando bancos o empresas paraestatales, lo que indicaba que se estaba gestando un nuevo vínculo entre el gobierno y el poder económico mexicano.

Sin embargo, el hecho de que se adelgazara al estado populista, no significó que se continuara con el presidencialismo autoritario y por el contrario en este sexenio se reforzó aun más por la amenaza de la corriente democratizadora.

Para finales de sexenio, la cordialidad entre gobierno y empresarios se resquebrajó por los costos económicos y políticos por la apertura comercial que resentía no sólo

población, sino el pequeño y mediano empresario. Salinas de Gortari a parte de enfrentar esta mala situación con el sector privado, enfrentó dos sucesos que marcaron la vida del país, la primera el levantamiento armado en Chiapas y la segunda la muerte del candidato del PRI a la presidencia Luis Donaldo Colosio en 1994, generando una crisis política.

El sector privado se mantuvo al margen de esta revuelta política y sólo se pronunciaron a establecer la tranquilidad social y el Estado de derecho, pero siempre manteniendo el modelo económico implantado por el gobierno salinista.

Si para principios de 1994, la situación política del país estaba en su nivel más bajo, para finales de ese año, la situación económica lo estaba aun más. El error de diciembre que provocó la devaluación del peso mexicano y una serie de desequilibrios económicos. Los empresarios ante esta situación empezaron a demandar más seguridad social, por la oleada de secuestros y robos que prevalecía en el país por causa de la crisis económica y el fortalecimiento del Estado de derecho. Ahora sólo quedaba cuestionarse sobre el modelo de desarrollo neoliberal implantado desde Miguel de la Madrid, y que terminó con todas las expectativas económicas políticas y sociales del país.

Las transformaciones políticas, económicas y sociales que se vinieron gestando desde el sexenio de Luis Echeverría hasta Ernesto Zedillo, contribuyeron a que el sector empresarial se implicara en el ámbito político. Fortaleciendo así su presencia en la toma de decisiones y contribuyendo en el desarrollo económico del país.

Pese al Estado intervencionista que se vivió desde los gobiernos posrevolucionarios se fueron dando cambios en la estructura del Estado, modificando las relaciones tradicionales entre el sector empresarial y el Estado. Dando paso a un fortalecimiento del sector privado en el desarrollo económico de México, y por consiguiente cuestionando al régimen político autoritario, pues el empresariado nacional no sólo se conformó con intervenir en los aspectos económicos sino también tener presencia en la esfera política.

La presencia y el desarrollo del sector privado mexicano dentro del aparato público ha contribuido a contrarrestar la ineficiencia y corrupción administrativa, así como del régimen político. De hecho en los sexenios analizados, se hicieron reformas para terminar con la ineficiencia y corrupción, ya que el sector empresarial había manifestado su descontento por el abuso de poder que imperaba.

Por los peligros de inestabilidad que ha vivido el país y sobre todo en los setenta, ya era una necesidad de que nuevos grupos participaran en la contienda electoral, y son los empresarios los que se lanzan a candidaturas gubernamentales y hasta participar en elecciones presidenciales.

El sector empresarial si ha contribuido a que después de tantos años de espera, se haya llegado a la transición en México, pues ha servido de contrapeso para terminar con el régimen autoritario y el partido de Estado.

LISTA DE ABREVIATURAS

COPARMEX	Confederación Patronal de la República Mexicana
CANACINTRA	Cámara Nacional de la Industria de Transformación
CONCANACO	Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
CONCAMIN	Confederación de Cámaras Industriales
AMIS	Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
CMHN	Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
ABM	Asociación de Banqueros de México
CCE	Consejo Coordinador Empresarial
FMI	Fondo Monetario Internacional
PIRE	Programa Inmediato de Reordenación Económica
PAN	Partido Acción Nacional
PRI	Partido Revolucionario Institucional
LOPPE	Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales
FDN	Frente Democrático Nacional
GATT	Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles
PRONASOL	Programa Nacional de Solidaridad
SEDESOL	Secretaría de Desarrollo Social
COECE	Coordinadora de Organismos Empresariales para el Comercio Exterior
TLC	Tratado de Libre Comercio
PRD	Partido de la Revolución Democrática

BIBLIOGRAFÍA

- Aziz, Alberto (coordinador). México: una agenda para fin de siglo. Jornada Ediciones
- Bazañez, Miguel. Del pulso de los sexenios. Veinte años de crisis en México. Siglo XXI, México, 1999.
- Bobbio, Norberto. Liberalismo y democracia. FCE, México,
- Camp, Roderic Ai. Los empresarios y la política en México, una visión contemporánea. FCE, México, 1990.
- Campos, Juan Carlos, Roy Alberto. 6 de julio de 1997: Elementos para el análisis del voto. Consulta Mitofsky. 1997.
- Cárdenas, Nicolás, Guerra Enrique. México: Los obstáculos de la transición a la democracia.
- Concheiro Bohórquez, Elvira. El gran acuerdo entre gobierno y empresarios en la modernización salinista.
- Fernández Santillán, José. Política y administración en México. UNAM, México, 1989.
- Garrido N. Celso (coordinador). Empresarios y Estado en América Latina. CIDE, 1988.
- Loeza, Soledad. México, 1968: los orígenes de la transición. Colegio de México, México, 1996.
- Luna Ledesma, Matilde. Los empresarios y el cambio político en México, 1970-1987. Instituto de Investigaciones UNAM, Ed. Era, México, 1992
- Martínez Nava, Juan Manuel. Estado empresarios en los sexenios López Mateos- Echeverría. Nueva Imagen, México, 1984.

- Medina, Luis. Hacia el nuevo Estado: México 1920-1994. FCE, México, 1996.
- Montesinos, Rafael. El discurso político de las organizaciones empresariales. UAM-I, México, 2007.
- Morlino, L. Cómo cambian los regímenes políticos. Centro de Estudios Constitucionales Madrid, 1985.
- Rivera Ríos, Miguel Ángel. Crisis y reorganización del capitalismo mexicano. Ed. Era, México, 1993.
- Salazar, Luis (coordinador). Elecciones y transición a la democracia en México. Cal y Arena, México, 1999.
- Serrano, Claudia. Historia de México a la luz de los especialistas. Esfinge, México, 2005.

HEMEROGRAFÍA

- Alfie Cohen, Miriam, Méndez, Luis. "Sociedad civil y transición política en México: perfiles y perspectivas" en El Cotidiano 90. México, julio- agosto 1998.
- Alfie Cohen, Miriam, Méndez, Luis. "Tres lustros de transición en México" en El Cotidiano 89. México, mayo-junio 1998
- Alfie Cohen, Miriam, Méndez, Luis. "La lucha en el centro del poder" en El Cotidiano 75. México, 1995.
- Loaeza, Soledad. "La incertidumbre política mexicana" en Nexos. México, 1993.
- Revista Líderes de México, Carlos Salinas de Gortari 1996
- Montesinos, Rafael. "Empresarios y el nuevo orden estatal" en El Cotidiano México, 1992.

- Montesinos, Rafael. “Empresarios y neoliberalismo y la miserias de la transición” en El Cotidiano México, 2000.
- Montesinos, Rafael. “El pensamiento Empresarial y el poder” en El Cotidiano México, 2001.

TÍTULO: El papel del Sector Empresarial rumbo a la Transición en México (1970-2000)

TEMA: ¿Cuál ha sido la relación entre el sector empresarial y el Estado rumbo a la transición en México?

LÍMITE ESPACIAL: La investigación se efectuará en México.

LÍMITE TEMPORAL: Para la investigación del trabajo se tomará el periodo que va de (1970- 2000).

PREGUNTA CENTRAL: ¿Cuál ha sido el papel principal del Sector Empresarial en el desarrollo de la transición en México?

PREGUNTAS DERIVADAS:

1. ¿Cómo se da el desarrollo en cual el sector empresarial interviene en la política y llega a tener peso político?
2. ¿El sector empresarial al no estar bajo la protección des Estado ha ayudado al desarrollo de la transición en México?
3. ¿De qué forma el sector empresarial ha contribuido a las transformaciones del régimen político mexicano?
4. ¿Cuál es el papel del aparato administrativo en la relación entre el Estado y los empresarios?
5. ¿De qué manera el sector empresarial ha contrarrestado la corrupción del régimen político que ha afectado el desarrollo de la transición en México?
6. ¿El sector empresarial ha sido un gran contrapeso político para el gobierno y así contribuir a la transición en México?

HIPÓTESIS:

1. Las transformaciones políticas, económicas y sociales contribuyeron a que el sector empresarial se insertara en el ámbito político y así dar paso a la transición en México.
2. El cambio en las estructuras del Estado modificó las relaciones tradicionales entre el sector empresarial y el Estado, dando paso a un debilitamiento del apoyo del Estado al empresariado.
3. La presencia del sector empresarial y su desarrollo dentro de la política ha contribuido a las transformaciones del régimen.
4. La presencia del sector empresarial en el ámbito político ha sido decisiva para el combate contra la ineficiencia y corrupción administrativa.

5. La presencia del sector empresarial ha beneficiado a contrarrestar los malos manejos del régimen político que ha caído en la corrupción y ha afectado el desarrollo de la transición en México.
6. Los pesos y contrapesos es un factor muy importante para tener un buen gobierno, y el sector empresarial ha sido un contrapeso importante para la transición en México.

VARIABLES INDEPENDIENTES:

- Sector empresarial
- Poder político
- Estado
- Régimen político
- Aparato administrativo
- Gobierno

VARIABLE DEPENDIENTE:

- Transición

UNIDADES DE OBSERVACIÓN:

- Sector empresarial
- Gobierno
- Estado
- Régimen político

CATEGORÍAS:

- Sector empresarial
- Gobierno
- Estado
- Transición
- Régimen político
- Poder Político
- Política
- Aparato administrativo

OBJETIVOS:

- Determinar si el sector empresarial ha desempeñado un papel importante para la transición en México.
- Evaluar el papel del Estado en relación a la obtención de poder político del sector empresarial.
- Analizar si la separación entre el sector empresarial y el Estado ha contribuido a la transición en México.
- Determinar si la presencia del sector empresarial ha contribuido a las transformaciones del régimen político, y al desarrollo de la transición en México.
- Analizar si el aparato administrativo ha beneficiado al sector empresarial en su desarrollo en la política en México.
- Determinar si el sector empresarial ha ayudado a contrarrestar la corrupción del régimen político, y así llevar a buen camino el desarrollo de la transición en México.